

Año de 1869

Ex. 36

Nº 20.

Juicio de amparo promo-
vido por el Cno. 2. Joaquín
Blengio por la orden de prisión
que dió contra él el Ciudadano
Gobernador de este Estado de
Campeche.

Juzgado de Distrito de
mismo Estado.

(R)

W. A. 19

Inscrito 7/10/10/1869

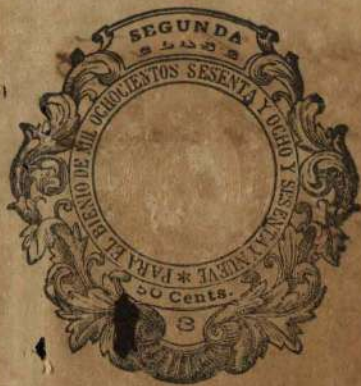
1803

14

1116

X X

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side]



C^o Juez de Distrito

Joaquin Pliego de esta vecindad ante
V. con el debido respeto expongo q^{ue} el C^o Gober-
nador del Estado con notable infracción de
las garantías individuales que otorgan nues-
tra carta federal pretende reducirme a
prisión por haber emitido mi opinión
sobre la legitimidad de sus autoridades
ante el H. Ayuntamiento de esta capital
donde que actualmente soy Presidente y
como esta providencia pretende y va
la acabo violenta y atentamente que
en este instante se encuentran en
la puerta de mi casa habitación
dos agentes de policía que me
capturaron

A V. C^o Juez ocurrente demandando amparo
contra dichos procedimientos que
se haya comprendido en la fracción
1^a ^{artículo 101.} de n^{ro} código fundamental y a fin
de que desde luego se digna man-
dar suspender precautionariamente
la ejecución de dichos procedimientos
en virtud de lo que dispone la
parte 2^a del artículo 80 de la ley

de 20 de Enero del presente año
Pido juratoria y protesto lo sus-
crito Campes Julio 7/869.

Otro si digo: que las garantías individuales q.
viola la providencia que acuso son las
que expresan los art. 16 y 104 de nuestra
Carta federal. Theo. ut supra.

J. Blengio

Campes Julio 7 de 1869.

Forko este recurso acubierto de
presentar por el C. Dr. Joaquin Blengio,
pidiendo amparo contra la orden de pre-
sion decretada contra el por el C. Goberna-
dor del Estado y en el que pide igualmente
te que se suspenda su ejecucion, en confor-
midad con la parte 2^a del art. 5^o de la
ley de 20 de Enero de este año, "se suspen-
de preventivamente la ejecucion de otro
procedimiento. Librese auto oficio al C. Gober-
nador con insercion de este auto para los efectos
que en el se expresara. Notifiquese.

Lic Pedro Montalvo Francisco Campos

En seguida se libró y entregué al Cuid. Gobernador
del Estado el oficio prevenido en el auto anterior. Doy fe

Campes

Doy fe que no notifiqué el auto anterior al C. Dr. Joaquin
Blengio, por que el C. Dr. de la cárcel me manifestó que con-
tando papeles incommunicados, no se podia hablar con él. Fecha ut supra

Campes



Fecha Julio 8 de 1869

2

Habiendo sido consignado á este Juegado el Sr. Bagüni Blengio por el C.^o Gobernador de este Estado en oficio de esta fecha que acaba de recibirse por presunción de conspiración, y manifestando en dicho oficio que se tenga por concertación del que se dirigió anoche á aquella Autoridad con intervención del Auto anterior, y con el cual no se cumplió pues se encuentra aun reducido á prisión, cumplare lo dispuesto en él, poniendo en consecuencia en libertad al aprehendido Sr. Blengio, sin perjuicio de iniciar inmediatamente y por vía separada las diligencias relativas ^{al delito} por que se consignó á este Juegado á efecto de proseguir este juicio dentro de los terminos que la ley previene, dirigare atento oficio al C.^o Gobernador con intervención de este Auto acompañándole copia del curso del Auto, para que se le informe con justificación dentro del termino de tres dias sobre los motivos que lo impidieron á reducir á prisión á dicho Sr. Blengio. Y aunque este Juegado pudiera tener como informe el oficio y demás documentos que acaba de remitir el Gobernador al Jefe de la jurisdicción al mismo Blengio, decaigo sin embargo llenar el requisito de, pedir dicho informe como lo previene la ley de esta materia. Digale además al propio C.^o Gobernador, que este Juegado ha visto con sentimiento, que en repetidos Autos anteriores no haya sido obsequiado como lo esperaba. Inverosímil al delito y vale

Lic. Montalvo

Francisco Campos

En el mismo día fue saber los dos
Amos: arribaron al C. Dr. Pagan
Blanco y después quedaron en el C. Dr. Pagan

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

Foto continuada sin pua de este auto
en lo conduciendo al Mayá de la canal
bu. etaronis Maldonado, y después que
cumplida. *[Signature]*

Ant. Maldonado

En campo al mar del mismo se ha
gió oficio con incensación del auto de fe
al C. Dr. Gobernador de la ciudad de
Cano en el se dispone. *[Signature]* *[Signature]*

[Signature]



SECRETARIA DE GOBERNACION Y
HACIENDA.

Ordenando el informe que se dio al Jefe por donde
tanto que de aquí con motivo del recurso de amparo entablado
por el Sr. D. Juan Blasco, contra el acto de reduciendo a prisión
para someterlo al Jefe competente, tiene este Gobierno el sentimiento
de ver el recurso de amparo manifestar que no se ampara, de ha suspendido
la ley de 20 de Enero de este año tanto en la admisión del recurso
cuanto en decretar la suspensión del acto, y en la medida que sin
de ambas cesan causas de responsabilidad, según el art. 23 de la
Ley, es de esperar que la Suprema Corte, a quien tiene que pasar este ne-
gocios después de la sentencia definitiva que el promueve como
dona el art. 13, hará cumplida justicia al Ciudadano del Estado.
Además como en definitiva se le negase el amparo solicitado por
falta de motivo, no duda el Gobierno que en cumplimiento del art.
10 de la Constitución a la parte a la pena que allí se determina.

Quisieramente, hasta el buen sentido, para concluir que el recurso
no es absolutamente procedente, puesto que la cuestión en última res-
puesta, en su expresión más simple se reduce a esta: ¿La autoridad política
o administrativa tiene el derecho de ordenar la aprehensión de un
hombre sea o no ciudadano? En el caso actual la cuestión es esta:
¿La autoridad política o administrativa tiene el derecho de ordenar
aprehensión de un hombre que no goza de la cualidad de ciudadano?
De uno u otro modo, la respuesta no puede ser dudosa. Negar el
derecho a la autoridad, sería negar lo que es de ley y de práctica
desde que el mundo existe, lo que estamos viendo todos los días, y
que todas las naciones de la tierra, lo que es indispensable para
conservar el orden y tranquilidad pública, para que pueda existir
la sociedad. La Constitución general no podía disponer de tan
indisputable derecho a la autoridad, Leyes de este, por su art.
21, extendió sus facultades hasta imponer quinientos pesos de
multa o hasta un mes de reclusión. Por verdad, sería in-
vulnerable que, otorgando el art. 10 de la Constitución a toda

persona, es decir, a todo hombre o mujer, la facultad de aprehen-
der al delincuente y a sus cómplices, en el caso de delito in-
fragante, se considera a la autoridad política o adminis-
trativa, fundada de semejante derecho. Sin embargo, si es incon-
ciso el derecho de aprehender que tiene la autoridad, al crimen
le no puede hacer ofensa ni agravio a nadie, ni puede violar el
derecho alguno, ni ninguna garantía constitucional, porque
como dice la Regla de derecho: Non per tuenda est qui usa
de su derecho, Reg. 14 tit. 34 L. 4. Luego es evidente la no proce-
dencia del recurso de amparo del Sr. Blengio.

Observará el Jefe que el art. 16 de la Constitución al
reprender a toda persona la facultad de aprehender al delin-
cuente y a sus cómplices, en el caso de delito infragante, le
prescribe el deber de ponerlos sin demora a disposición de la
autoridad inmediata, sea judicial o política, pues no distin-
gue. En el acto de la aprehensión el aprehensor usa de un
derecho, constitucional y el aprehendido no podría contra-
ponerle acto, intemperancia, recurso de amparo, puesto
que no hace agravio, ni viola las garantías de otro, quien
usa de su derecho. Pero si el aprehensor no cumple con
el deber constitucional de poner a los aprehendidos, sin
demora, a disposición de la autoridad inmediata,
entonces abusando de la facultad constitucional, ten-
drá lugar el juicio de amparo, que interdicen los
aprehendidos, e igualmente, el art. 17 de la Consti-
tución ordena que ninguna detención podrá exceder
del término de tres días, sin que se justifique con-
tra auto motivado, de prisión y los demás requisitos
que establezca la ley. En esta virtud, la autoridad
política puede disponer la aprehensión de un hom-
bre o para castigarlo con una reclusión correccional,
o para remeterlo a la autoridad judicial según los
casos. Si hace lo primero, en virtud del art. 16 de la
Constitución, dentro del término de tres días, conforme
al art. 17 deberá la autoridad dar el auto
motivado de prisión; y si lo segundo, dentro

del mismo tenor, debe faltar al deber o faltar a
disposicion de la autoridad judicial competente, au-
torizando un acto. Pero, muchas veces el tenor
de las leyes, no hay alio por parte de la autori-
dad judicial, no puede por consecuencia intentarse un
proceso, contra un acto, que es el ejercicio de un de-
recho constituido.

Del argumento dicho fundamental, el Poder
la autoridad judicial, respecto una disposicion que ha
ordenado la autoridad judicial, es a saber la autori-
dad judicial un acto que vulnera y restringe la soberania
del Estado, es inadmisible a la seguridad en el caso y me-
lizar el caso del recurso de amparo de la justicia. El
art. 1.º de la ley de 18 de Mayo, este es, el amparo de
la ley contra la autoridad judicial que co-
mete la causacion.

Se opone la parte al Gobierno, suponiendo
para estudiar la cuestion que puede resolverse por el
pleto de la ley. Este quien debe verse en la causacion
via de haber decretado el Jefe de la disposicion del
acto, de disposicion ordenado por el Gobierno, sin su
poderes, informo, como dispone el art. 5.º de la ley, au-
torizando el Jefe de la parte segunda del mismo
artículo, que habia de ser una notoria, porque se
induce, como está demostrado, que el recurso intentado
es no procedente y debe desecharse de plano, por
entendimiento de la ley. Con el fin de la ley, au-
torizando la parte segunda de dicho artículo 5.º de la ley.

Con estas antecedentes para el Gobierno, de
ocuparse sinceramente de los fundamentos del
ter. Alga en primer lugar la nulacion del art.
culo 16 de la constitucion. Este dice que nadie pue-
de ser molestado en su persona, familia o
bien, sin virtud de mandamiento, escrito de la autori-
dad competente que funde y motive la causa.

Legal del procedimiento... ¿Que ha faltado en el
caso? ¿No es autoridad competente para disponer en
este caso la autoridad pública, el Gobierno
del Estado? ¿No le presenta al actor el coman-
dante de la guardia de fábrica el mandamiento por
escrito? ¿No le hace la notificación el mismo
de pública persona, de orden del Gobernador,
con acuse del autor, que dirige el Gobierno
al abogado, acompañándole las constituciones puestas
en el hecho, y sin embargo del actor? ¿Que requisito
falta para que obedezca sin demora?
Ninguno, absolutamente ninguno.

Pero ¿que supone el Gobierno que
habría pasado nada de esto, y que al actor se le
hubiera presentado un guardia de fábrica, un
agente de la autoridad pública, han concurrido por la distin-
ción que era y lo hubiera dicho: La orden de la autori-
dad política, que me ordena, reduce a U. a prisión,
o a U. entrega a la cárcel pública. Se pregunta,
¿está obligado el Q. Prokuror, a obedecer, como
obedece todo el mundo, y como lo mandan todas
las constituciones y leyes, que no permiten hacer re-
sistencia a los agentes de la fuerza pública? Su
respuesta debiera ser, sin embargo, al precepto
de la autoridad, que tiene siempre a su favor la
presunción de que obra con justificación, cumplido
el mandato, podía representar a la autoridad
la U. de se creía atropellado, y U. cuando el infr-
actor del Gobierno, como dice el art. 5.º de la ley,
revolucionaria entonces en conocimiento de causa de
la autoridad del Gobierno, cometía o no un
delito, para el caso interpuso antes de con-
cluir la orden de prisión dada por el Gobierno,
solamente por error de fe, puede llamarse acuse
de autor, siendo su verdadero nombre,

de de nunciarse de voluntad a la jurisdicción o renunciar a
defensa toda la autoridad del Gobierno.

El otro artículo de la constitución que se
invoca, es el artículo cuatro que entre el actor, quien
no ha tenido abate suficiente para dársele sustituto
muerte, quiere considerarse como diputado suplente
al Congreso general. La primera objeción que
se hace al Gobierno desde luego, es la de que no puede
poder hacer valer como fuesen el furo de diputado
quien por declaraciones del mismo publicadas en el
núm. 149 del periódico semi oficial "El Capital
publico" correspondiente al día 4 de mayo último
está privado de los derechos de ciudadanía por su trans-
curso a la patria y declarado inhabil para ejercer
todo cargo de elección popular. Antes de esta de-
claración voluntaria, el aquejado de la traición de tal
modo abrumado al actor que cuando fue enca-
usado por un delito común por el C. Juez de lo
Criminal, se sometió docilmente a la prisión y
suficientemente sin atreverse a alegar, como ahora
en furo de diputado. Esto es un hecho de pública
notoriedad y bastaría, en caso de duda, que pro-
ducir el C. Juez de lo Criminal una serie de
fechos que lo comprobare.

Pero vamos adelante, y por una pieza
del momento en que el Gobierno no puede consentir, por
que no puede obstar contra sus propios actos, conside-
remos que el actor es un diputado suplente. De-
claro modo. Para que no haya inconvencencia por
parte del Gobierno, supongamos que no se trata de
Don Blengio sino de un diputado, C. que ha
suficiente el recurso de amparo contra la orden
de prisión que tiene un Gobernador. J. Crombie
nos y vemos que dice la constitución art.
104. "Si el delito fuere común (Ma a esphe"

en que consiste el fuero de los altos funcionarios
de que habla el art. anterior 103 que comprende
a los diputados.) el Congreso regido en gran par-
te de declarará a magnitud absoluta de voto, si ha
lugar a proceder contra el acusado. En
caso negativo, no habrá lugar a ninguno
procedimiento ulterior. En el afirmativo, el
acusado queda por el mismo hecho, separado
de su encargo y sujeto a la acción de los
tribunales ordinarios. Como se ve, en todo el
artículo no se habla ni se dice hallarse de
aprehensión, porque nadie tiene fuero para no
ser aprehendido, el que constituya crimen a-
borto, sea quien fuere, si le reduce a prisión
segura, sin perjuicio de ventarse después de
voto de voto de aquel fuero y que tribunales
deben proceder para juzgarlo. Esto es, desmoran-
do, obio, para que el Gobierno no distraiga en
otras las atención del Jefe, que advertirá
que reclamó al Presidente de la República, du-
rante el tiempo de su encargo, le concede la
Constitución la inmunidad de no ser acusado
por delitos leves. La práctica está absolutamente
de conformidad con la doctrina, y así vimos
en el caso del C. Gral. Benigno Carrizosa, depu-
tado al Congreso de la Unión y acusado de homici-
dio, que alegó sus fueros, e interrumpió sus re-
sponsos estando en prisión segura; pero no le po-
día ocurrir pedir amparo contra el acto de
la aprehensión.

Lo que quiere el Gobierno concluir es
llamar la atención de U. sobre dos puntos esen-
ciales del escrito del actor. 1º El artículo con-
ducido que manifiesta cuando dice que el Co-
ngreso pretende reducirlo a prisión por haber

emitir de su oficina sobre la Legitimidad de la autoridad del Gobierno, contra el H. Ayuntamiento, municipal de esta Capital. No consideramos en esta parte de la paccion XI art. 3.º de la Ley de 6 de Diciembre de 1856 que tiene exacta aplicación al caso, en el art. 6.º de la Constitución que dice: "La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoque algún crimen o delito, o perturbe el orden público." Se ve pues, que no siempre puede emitirse de su oficina, y que el art. 6.º citado se le prohiba al (D. Blasco), lo mismo que la ley de 1856.

El otro punto es la insultante temeridad con que insiste en darme el título de precedente actual del H. Ayuntamiento. Esta insistencia temeraria es bastante para acreditar, ante el encargado, la justificación con que ha procedido el Gobierno.

Como repuesta es de dejar obsequiando el provido de U. que contiene su oficio, etc. aya; pues por lo que mira a los hechos, están comprobados y referidos con la mayor exactitud en su anterior oficio de 8 del corriente conque le envío el expediente, de que se sirva U. acusarle recibo, con fha. 9.

Proteto a U. con tal antelación distinguida consideración.

[Firma]

[Firma]

dep^a de Libertad.

Campesino, Julio 10 de 1869

P. Garcia

Ind. Smith

Casa del Distrito
del Estado

Presente

Comme



7
Fecha Julio 12 de 1869.

Transmítase a mi antecesor, el
oficio anterior del C. Gobernador, recibido
a puertas del 10 de Sabado diez del presente.
Pongase en este expediente copia certifi-
cada del oficio (de ~~anexación~~) del mismo Go-
bernador y documentos que acompaña
en que consigna a este Jefe al Dr. Cmo.
Joaquín Blengio por el delito de conspiración,
y fecho para todo al Cmo. Promotor Fiscal
para que pida en el termino de tres dias =
Fecundo = de acusación = no vale.

Lic. Montalvo

Francisco Campor.
Cmo.

Incl. mismo oficio para que la acusación
prevenga en el Auto acusación. Doy fe

Campor.

Corregido

Gobierno del Estado de Campeche Secretaría de Gobernación
y de Hacienda = Por las actas de las sesiones extraordinarias
del H. Ayuntamiento de esta Capital celebradas los dias cin-
co y siete del proximo pasado que tengo el honor de adju-
tarle en copias, se servirá V. ver que el Sr. D. Joaquín Blen-
gio, está convicto del crimen de conspiración, conforme a la
terminante disposición de la fracción once artículo tercero
de la ley de 20 de Diciembre de mil ochocientos cincuenta
y seis para castigar los delitos contra la nación, contra
el orden y la paz pública. En la primera de dichas actas
consta de una manera evidente que el Sr. D. Blengio no so-
lamente excitó al H. Cuerpo a desobedecer la orden del go-
bierno que lo separó de la presidencia de dicha corpora-
ción, por haberse declarado, en forma, la militancia de la

obediencia para tal encargo, por estar privado de los derechos de Ciudadano, sino que llevada hasta el extremo en criminalidad, propuso que se sancionase el despojo inmediato del Gobernador y de uno de los H. H. boniferos de Estado, para que entronizados el desorden y la anarquía en el Estado, el H. Ayuntamiento encabezado por el se hiciera arbitro de los destinos del país. Y si bien sus criminales intenciones y proyectos desorganizadores se estrellaron contra la providencia inflexible y fría del H. Cuerpo, no por eso el crimen deo de consumarse solemnemente por parte del acusado, que ha incurrido por el mismo hecho en las penas que dicha ley sanciona. Después que el Sr. D. Plengio cometió el crimen referido, determinó salirse incontinenti de esta Capital, dirigiéndose momentos después de la sesión del día cinco para N. Orleans en el Pailebot Julia logrando de este modo evadirse de pronto del consiguiente castigo. Me fíca la acción del Gobierno para perseguirlo en país extranjero, esperaba su regreso a la República, y tan luego como tuvo noticia cierta de su desembarco en Sinal, se dirigió exhausto al C. Gobernador de Yucatán para que procediese a su aprehensión y lo remitiese a este Estado, habiéndole contestado dicho Sr. Gobernador lo que aparece en la copia adjunta número tres. Por fin en la tarde del día de ayer llegó a esta Capital y en el acto dispuso el gobierno por conducto de la Jefatura política fuese conducido a la cárcel pública. El C. Jefe político dió sus órdenes para el cumplimiento de la de este Gobierno y al comunicársela al Sr. Plengio pidió se le guardase la consideración de ver a su familia. Esta le fue concedida, pero viendo que tardaba mas del tiempo necesario, fue excitado el comandante de la guardia de policía para el cumplimiento de dicha orden y el Sr. Plengio contestó que no conocía la autoridad del Jefe político. Con vista de tan humilde reincidencia en su crimen, este Gobierno dispuso el exacto cumplimiento de la orden. El Sr. Plengio volvió a insistir en no cumplirla por desconocer a la autoridad política. Se le volvió a amonestar por última vez y como en las anteriores se mostró renuente a obedecerla.



Intamente indignado este Gobierno por una resis-
tencia tan inconsiderada que ultrajaba su dignidad y
decoro, dispuso se hiciere uso de la fuerza, enviando al
Sr. D. Felipe político para que lo hiciere salir, y esta medida
hubo mucho más criminal a Olmgio por las ofensas que
le dirigió a dicha autoridad, diciéndole que la desconocía,
por la motivación de dicho funcionario, causó un trance desagra-
dable y Olmgio le ofreció que tan luego concluyese una portes-
ta que estaba haciendo dispondrían de él. Ya habían transcurrido
dos horas y no pudiendo consentir el Gobierno en que se conti-
nuase burlando su autoridad por quien no tiene ⁿⁱ la cualidad de
Sr. D. se vio obligado a ordenar al Sr. Secret. de Guerra y guardia na-
cional que lo condujese con cuatro policías armados a la cárcel
pública. Entonces fue cuando el Sr. Olmgio no teniendo otro re-
curso cedió y fue conducido por dicho Secret., guardándole toda-
via la consideración de que se retirasen los agentes de policía. Por
tales motivos y a nombre de la paz y el orden público consigna este
Gobierno a su cargo al Sr. D. Don Juan Olmgio por el delito de
conspiración con reincidencia, para que juzgando con la impar-
cialidad propia de la justicia, se sirva V. aplicarle la pena a
que se ha hecho acreedor. Mas antes dignese permitirle a este Go-
bierno, usando del derecho que le compete, recusar, como en efec-
to recusa al Sr. Fiscal de ese Tribunal a fin de que no inter-
venga en este asunto por considerarlo parcial. Para acreditarlo
tengo el honor de acompañarle una planilla en que se presen-
ta al Sr. Olmgio para D. putado al Sr. Congreso de este Es-
tado, que circuló impresa en esta Capital y en la que aparece
como uno de los primeros firmados el Sr. Fiscal. En esta plani-
lla se desprende la observación hecha por este Gobierno y publica-
da en El Espíritu Público número ciento noventa y nueve por
la que aparece el Sr. Olmgio privado de los derechos de ciu-
dadano mexicano por haber servido al Mandado Imperio y
que por una ciega oposición se insistió en su elección como con-
ta del encabezamiento de la pre dicha planilla. El Gobierno al
dirigir a V. el presente en contestación a su atento oficio de ano-
che espera de V. la inexcusable justicia y le portesta su conside-

ración y especial aprecio. Presidencia y Libertad. Campeche julio ocho de mil ochocientos sesenta y nueve = Pablo Garcia = Pedro Laralle, Secretario. Cuid. Que de Distrito de este Estado = Presente. Gobierno del Estado de Campeche Secretaria de Gobernación y Hacienda. Segunda clase = Para el bien de mil ochocientos sesenta y ocho y sesenta y nueve = cinco centavos = cinco = Ayuntamiento de Campeche = Secretaria = Al margen Ciudad. Manuel Campos Diaz = Leandro Regil = Carlos Gutierrez = Abelardo Cardenas = Eduardo Berrow = Doña Maria Movera = Santiago Martinez = Sesión extraordinaria del día cinco de junio de mil ochocientos sesenta y nueve = Presidencia del Cuid. Joaquín Blengio = Abierta la sesión, el b. Presidente explicando el motivo de ella, leyó un oficio que con fecha de ayer le dirigió la Jefatura política del Partido de esta Capital, comunicándole la resolución del H. Consejo de Estado que declaró nula su elección = Manifestó en seguida como consideraba su destitución y acabó, diciendo = primero No debiendo considerarse al b. Pablo Garcia como Gobernador del Estado de Campeche, por ser nula su elección, según la fracción primera del art. veinte y cinco de la ley de convocatoria de catorce de Agosto de mil ochocientos sesenta y ~~nueve~~ ^{ocho}, no tiene la facultad competente para ordenar mi destitución de la presidencia del H. Ayuntamiento, en que me colocó el sufragio popular = segunda La resolución del H. Consejo de Estado carece de valor, por que el b. José del R. Hernandez no tiene el carácter de consejero, puesto que no hizo la protesta de la ley ante la H. Legislatura que lo nombró = Tercero, sin embargo de no darme por separado de la Presidencia, de que se me quiere despojar, fui la conciencia por dos meses al H. cuerpo, por convenirme así para vindicarme y para que esta Corporación pudiese mas libremente deliberar sobre las cuestiones que se presentaban = Cuarto. Pido que se publique el acta de esta sesión



extraordinaria, inmediatamente que sea aprobada =
 Véase de la palabra en seguida el Cind. Martin y dispo:
 Segun el artículo cuarenta de la Constitución del Es-
 tado al Congreso toca hacer el escrutinio de la elec-
 cion de Gobernador y Vice-Gobernador, y calificar y
 resolver las dudas y objeciones que se promuevan en orden
 a su legalidad y a las cualidades de los electos. Por lo tanto,
 cualquier particular o corporacion que quiera hacer obje-
 cion alguna a la eleccion de Gobernador debe entablarla
 ante la Legislatura del Estado, no siendo esta corporacion
 la competente para inventar ni resolver la cuestion. Que en
 cuanto a la licencia que solicita el Presidente, de dos meses,
 puede tomarse el tiempo que le conviniese para recoger los da-
 tos de su vindicacion y si estos son de atenderse, el M. Ayunta-
 miento tendria el deber de acogerlos y defenderlos como su pre-
 sidente legitimo. = Todos los demas consejeros convinieron con el,
 y se levanto la sesion a que no concurrieron los Cind. Mestre,
 Lopez, y Aras por indisposicion y previo aviso, y el Cind. Ba-
 tista que esta licenciado = Manuel Campos Diaz una rubrica =
 Leandro Regil una rubrica = Carlos Gutierrez una rubrica =
 Abelardo Cardenas una rubrica = Eduardo Berroon una rubrica
 Don M. Llovera una rubrica = Santiago Martinez una rubrica
 Dimas Rivas Secretario una rubrica = La copia fiel del acta
 original que esta a folios cuarenta y dos y cuarenta y tres del
 libro correspondiente = Campeche junio veinte y ocho de mil-
 ochocientos sesenta y ocho = Dimas Rivas Secret. una rubrica
 * La copia que certifico, Campeche, Julio 3. de 1869. Don, Lavallo Secretario
 Gobierno del Estado de Campeche = Secretaria de Gobernacion y
 Hacienda = Segunda clase = Para el bienio de mil ochocientos-
 sesenta y ocho y sesenta y nueve = cinco centavos = cinco = Ayun-
 tamiento de Campeche = Secretaria = Al margen Cind. Lean-
 dro Regil = Abelardo Cardenas = Francisco Mestre = Eduardo
 Berroon = Don M. Llovera = Pablo N. Aras = Santiago Mar-
 tinez = Carlos Gutierrez = Sesion extraordinaria del dia siete de
 junio de mil ochocientos sesenta y nueve = Presidencia del C.
 Manuel Campos Diaz = Se abrió la sesion y manifestó la pre-
 sencia que el objeto de ella era revisar el acta de la anterior

cuya copia fuere el Superior Gobierno del Estado.
Se dió á ella lectura y el Sr. Cardenas inscribió que
á la segunda observacion habia añadido la frase
decir que en caso de haber hecho la protesta el
Sr. D. del Rosario Hernandez, retiraba su acu-
sacion = Fue aprobada el acta con una adición, acon-
dándose extender inmediatamente el acta de la sesion
de hoy que fue igualmente aprobada para remitir
copia de ambas al Gobierno. Se levantó la sesion =
Manuel Camacho Diaz = Presidente una rubrica = Lean-
dro Regil una rubrica = Abelardo Cardenas una ru-
brica = Francisco Mure una rubrica = Eduardo Per-
ron una rubrica = Sr. M.^a Llovera una rubrica =
Pablo Sr. Arce una rubrica = Santiago Martinez
una rubrica = Carlos Gutierrez una rubrica = Dámaso
Rivas Secretario una rubrica = La copia fiel del origi-
nal que está á fols cuarenta y tres vuelta del libro
correspondiente Campeche, junio veinte y ocho de
mil ochocientos sesenta y nueve = Dámaso Rivas Secret.
una rubrica = La copia que certifico Campeche julio
ocho de mil ochocientos sesenta y nueve = Pedro Llave
Me Secretario

Gobierno del Estado de Campeche Secretaria de gobernacion
y Hacienda = Republica Mexicana. Gobierno del Estado
de Yucatan = Impuesto de la comunicacion de V. fecha
trece del corriente relativa a pedirme la aprehension y re-
mision á una Capital del D. D. Joaquin Olguin, tengo
el sentimiento de decirle en contestacion que no se en-
cuentra ya en este Estado de mi mando. Protuto á V.
mi consideracion y particular aprecio = Independen-
cia y Libertad Merida Julio seis de mil ochocientos
sesenta y nueve = N. A. Cepeda Pizarra = Senor Gon-
zalez Oficial mayor = Sr. D. Gobernador del Esta-
do de Campeche = La copia que certifico Campe-
che, julio ocho de mil ochocientos sesenta y nueve =
Pedro Llave Secretario



Elecciones = Como solo el H. Congreso Nacional ratifica
 la legalidad de las elecciones de sus miembros segun el
 articulo treinta y cinco de la ley de veinte de julio de
 mil ochocientos sesenta y uno no temiendo faltar a nues-
 tros conciudadanos para diputados al Congreso del Estado,
 a los dignos Ciudadanos que a continuacion se expresan, a pesar
 de lo que sobre los dos primeros se ha publicado en los numeros
 ciento noventa y seis y ciento noventa y siete del periodico semi-
 oficial del Gobierno, seguros de que ante aquel H. cuerpo se vin-
 dicaran satisfactoriamente = Diputados propietarios = Ciu. Do-
 n Juan Blengio = Don Trinidad Heron = Suplentes = Andres Mar-
 ra = Pablo S. Arce = San Felipe mayo veinte y nueve de mil
 ochocientos sesenta y nueve = V. Capmany = Miguel Urbina = Don
 Souer = L. P. Chosa = Anastasio Arana = Dimacio Rivas = Sal-
 vador Dondé = Marián Romero = Miguel Walden = M. J. Ocampo =
 Manuel Campes Diaz = Abelardo Barrios = Manuel Ramon Lam =
 Angel M. Bautiano ^{Excmo. Sr.} ~~Excmo. Sr.~~ Salvador Priat D. = Antonio
 Raso = M. Barrio = Pablo Salazar = Francisco Mestre = Anse-
 lio Garcia = Don M. Llovera = Joaquin Mantabano = Fernando
 D. de Estrada = Andres Espinola = Manuel D. Salazar = Juan Ramon
 Lina = Pedro Dorantes = M. Batista = Manuel Lopez Oliver = Pedro
 Lopez Oliver = Rafael Bacharim = G. Espinola = Felipe Mac Gre-
 gon = Luis Lopez = Luis Ortu = Francisco M. Ruiz = Pedro S. Arias
 Joaquin Hernandez = Eduardo de Estrada Mac Gregor = Adolfo Raso =
 Hermenegildo Vargas = Don de la S. Rodriguez = Ramon Olive-
 ra = Juan de San Rosado = Fernando Novelo = Marcos Heredia
 Gumercindo Valdez = Agustin Romero = Feliciano Larz = Hilario
 Bortero = Tomas Ancona = Pedro V. Mierano = Pablo Morano = San-
 tiago Caseres = Don M. Silva = Don del C. Alfaro = Antonio Mer-
 cader = Simon Berroa = Don M. Lopez = Don Juan Arias = Francisco
 de S. Rodriguez = Joaquin Ruiz = Mateo Cambra = Luis Aguilan-
 Ramon Alon = Miguel J. Rodriguez = Manuel Alfaro de Camara
 Rosario Perera = Carlos Mendosa = Don Dolores Gonzalez = Policar-
 po Martinez = Carlos S. Pon = Cristobal Justimiano = Patricio
 Aguilan = M. Estrada Rector =

Es copia que certifico de los oficios actas y folanilla de que
va hecho mencion y se hayan de fajar primera d' siete
de la causa seguida al S. D. Fraguin Mengio por pre-
sumiciones de conato de conspiracion a que me remito, Con
cumplimiento de lo mandado en el auto anterior de doce del
corriente, libro de presente que signo y firmo en Campe-
che a los trece dias del mes de Julio de mil ochocientos
suenta y nueve años. Entre renglones = ni = Es copia que cer-
tifico. Campeche Julio ocho de mil ochocientos suenta y nue-
ve Pedro Lavalle Secretario = Obisparta = vale = Putado = es
Obisparta = no vale = Enmendado = nueve = vale

Francisco Campos.



En el mismo dia entregué este expediente al C. D. Lic.
Joré Gomez promotor Fiscal de este Juzgado de Distri-
to para que pida en él, en el termino de tres dias se-
gun dispone el auto precedente fecha doce del corri-
ente. Doy fe.

Campos.



C. D. Juez de Distrito.

El infrascripto dice: No es muy
facil determinar con toda la justia
cia posible en el pte asunto, porq
pudiendose interpretar por el Dr. Pola



gion el recurso de amparo contra
una providencia del C.º Gobernador
del Estado para reducir a prision,
con lo q. se violaba el artº 16 de
la Constitucion, si se vea que el 104, pa-
rece natural que el recurso se deniegue
una vez que el Jto sometio al Dr Plen-
gion al Jefe, y que este lo mande
poner en libertad ^{al punto} para ser conseruado
con su auto de suspension del dia antea-
rior q. se le redujo a prision; puesto que
no teniendo otro objeto la sentencia mas-
los juicios que restituir las cosas al estu-
do que guardaban antes de la viola-
cion, y habiendose estas restituido tal
menos por una ficcion de derecho, que
de otro modo seria imposible) no hay
pueden decirse objeto sobre que se cayere
la sentencia. Pero no es este en mi con-
cepto el punto bajo el cual se debe ver
la cuestion, sino de si se ha violado
o no alguna garantia constitucional
para declarar que se ha o no violado.
Mas para esta declaracion habria tam-
bien alguna dificultad en el concepto;
pues en el informe del C.º Gobernador

que obra á p^{as} 3, 4, 5 y 6 se contradicen abier-
tamente lo que dice con alguna oscuridad
el actor, á saber, que se le quiso reducir
á prisión sin mandamiento expreso de
autoridad que motivara la causa de
procedimientos. En medio de esta contra-
dicción se hace necesario abrir este juicio
á prueba por el término de ^{ocho} ~~quince~~ días
prudente el Juegado, para q^{ue} con vista
de las que aducen el actor se esclarezca
el punto capital. Con tan motivo
pido que así se haga, después de lo
cual alegará con mejor conocimiento
de causa este ministerio, sobre lo que
se deba determinar en justicia.

Basta líneas = el 8 del pte - crea a vale.

Campeche 16 de Julio de 1869.

José Páez

Campeche Julio 16 de 1869.

Visto: habrese este juicio á prueba por el término
de cuarenta días comunes y prorrogables al dela Ley. Ha-
gase saber.

Lic Montalvo

Francisco Campos

Procurador

En el mismo día fué saber el caso ante
el Fiscal C. Lic. The. Gomez y que se emende.

Don The. Gomez

Campos



12
Este día impuse del propio auto
concediendo al Dr. D. Juan D. Blegio
y dejó quedar enterado. Dijo se

Blegio Campos

Campesche Julio 25 de 1869.

Tomando concluido el término por
que se recibió este juicio aprueba in
clucir la prerrogativa para ^d la ley que
se concedió en el mismo escrito de fecha
y en que se solicitó a la vez de prome
ver información de testigos; Acumulese
a esos autos dicha información, y enten
se al actor y al promotor Fiscal imponien
doles de esta providencia, dejando a
los autos por sus días comunes en la Secre
taria de este Juzgado, afin de que las par
tes tomen los apuntes necesarios para
formar un alegato escrito, que enre
garan dentro de otro término, como dis
pone el art. 13 de la Ley de 20 de Enero del
corriente año. Entre renglones = el vale

Lic Montalvo

Francisco Campos.
hno.

En el mismo día acumulé a esos autos las dili
gencias a que se refiere el auto anterior. Dijo se
Campos

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Handwritten signature or name, possibly "J. B. Smith".]

[Handwritten signature or name, possibly "J. B. Smith".]



C. Tuz de Distrito.

Joquin Benjio, vecino de esta ciudad, en el finis de amparo seguido a petición mia contra una providencia del C. Gobernador, en estado el de prueba, ante V. respetuosamente digo: Que conminando al mejor esclarecimiento de mis dichos sean examinados del tenor del interrogatorio siguiente los C. Francisco Carvajal, Sr. de Guerra y Guardia Nacional, Juan Carlos, Sef. político, y los C. Franc. Carrillo, Fernando D. de Estrada y Andres Espinola, y cuyo tenor es este:

- 1.º Digan si les comprenden las generales de la ley.
- 2.º Digan los dos primeros que clase de orden llevaron y de quien, la noche del y del actual cuando fueron a aprehenderme.
- 3.º Diga el segundo quiénes fueron los agentes de policía que mandó me redujeran a prisión la tarde del mismo y; qué orden les dio y examínenme sobre el contenido de ella a los policías.
- 4.º Digan los tres últimos si vieron que Sr. Juan Carlos y Sr. Francisco Carvajal me presentaron alguna orden escrita la noche antes referida cuando me hallaba en mi

casas habitación. Y en esta virtud
A V. suplico se digno hacerlo así con citación
fiscal al propio tiempo que prorrogar
el término probatorio por cuatro días
mas por si me fuere necesario aducir
alguna otra prueba que me sea favora-
ble. Lo pido en la
protesta de ley. - Campeche, julio
20 de 1869.

J. Mengis
Campeche Julio 20 de 1869

Por presentado. Donitose la información que se
promueve con citación del Fiscal del Juzgado,
o sea con las declaraciones a que se refiere noti-
ficando a los testigos en comparecencia. Prorogare
como se pide el término de prueba por cuatro días
mas con lo que revocan los autos de la ley

Lic. Montalvo Francisco Campos.
Eno.

En el mismo día me hizo saber el auto con-
tenido al C. Dr. Joaquín Mengis, y queda enterado.
Doy fe. Campos.
Mengis

En el mismo día compareció el propio auto y del
nombre de los testigos presentados al C.
Lic. José Gómez, Fiscal del Juzgado, y dijo
quedar enterado. Doy fe. Campos.
Gómez

En Campeche a veinte y tres del mismo
mes y año. Ines de Brito de seane li-
tado Lic. Pedro Montalvo (C.A. y A.K)



acab) procedió a tomar su declaración
 al Cuid. Francisco Campesino Trío. de grra.
 y guardia nacional, interrogandolos presen-
 te yo el Excmo. y previa protesta de decir
 verdad, al tenor del anterior escrito, y dijo
 a la primera pregunta, que no le comprenden
 las generales de la ley de que esá impuesta. A la
 segunda dijo: que la orden que llevó citando fué a
 prender al Dr. Don Eugenio Blengio la noche del
 siete del corriente, fué verbal del Cmo. Gober-
 nador del Estado para hacer cumplir la orden
 que tenia dada al mismo efecto a la Jefatura.
 Que lo dicho es la verdad so cargo de su protesta
 hecha en que se afirma y justifica, que es mayor
 verdad legal y firma con el C. Juan. Doyse
 Fecado = ante = comparendo = no vale

Lic Montalvo Fran^{co} Curarajal

Francisco Campesino
 Trío

En el mismo día. Ante el propio C. Juan
 compareció siendo citado el C. Excmo. poli-
 tico de este Partido Juan Carbó, y presen-
 te yo el Cmo. previa protesta de decir
 verdad, se le interrogó al tenor del ante-
 rior escrito.

A la primera pregunta dijo. No me com-
 prenden las generales de la ley de que esá impo-
 A la segunda dijo. Yo recibí orden Verbal del
 Cmo. Gobernador con anticipación a la

Llegada a esta Ciudad de D. Joaquin
Blengio para que cuando arribase a
esta plaza lo redujese a prisión en el
momento que tubiera noticia de ella,
y para su cumplimiento libré orden
por escrito al Comand.^{te} de policía Don
Teodoro Vargas; portendola amente volvi
a recibir otra orden Verbal del Cn. Guber
nador con motivos de que se retardaba el
cumplimiento, y entones fui personal
mente ala casa del Dr. Blengio para
informarme de la razon. Y responde
A la tenera dijo. Yo solo designe al Com.^{te}
de la policía, y fue el que nombró a las
personas que le acompañaron de la
misma policía, despues de que cuando
el solo me habia presentado, y no habia
logrado el objeto por diversos pretextos
con que procuró eludir el Sr. Blengio
el cumplimiento de ella. Las instrucciones
que di al Comand.^{te}, fueron
de acercarse cortemente al Sr. Blengio
tan luego como desembocare en el
muelle, empujando la orden y impli
cándole la signiese ala prisión sin
dar lugar a que se violentara al
guna, cuya replica yo tambien
sola me cuando fui personalmente
a la casa. Y responde que lo dicho
es la verdad so cargo de mi protesta



15

ta fecha en que se afirma y ratifica, que es mayor de edad legal, y firma con el C. Juez

Don
Lic Montalvo Juan Carbó

Francisco Campor,
Lrno.

En Campeche a Veinte y cuatro del mismo.
Ante el Cuid. Juez de este conocimiento, comparecieron siendo citados el Cuid. Teodoro Vargas Com. de policía de esta Ciudad, y presente yo el Lrno. juez vía protesta de decir verdad, fué interrogado sobre el contenido de la orden que le dió el Lrno. Jefe político Juan Carbó para reducir a prisión al Dr. Don Joaquín Blengio, y dijo. La orden con que procedí a prender al expresado Sr. Blengio, es la que presento fechada el siete del corriente y rubricada por el C. Jefe político, la cual puede copiarse si le parece al Juezado; y habiendo dispuesto el C. Juez que se copie en esta misma declaración, lo verifico y dice así:
"Gefatura política del parrico de Campeche = En virtud de orden Superiora procederá a aprehender al Sr. D. Joaquín Blengio y conducirlo a la cárcel pública a disposición del Gobierno del Estado = Campeche Julio siete de mil ochocientos sesenta y nueve = Juan Carbó = C. Comandante de policía". Y responde que lo dicho es la verdad en cargo de su protesta hecha en que se ratifica, que es mayor de edad legal, que no le comprenden las generales de la ley q. le fueron explicadas, y firma con el C. Juez, Don

Lic Montalvo Teodoro Vargas
Francisco Campor,
Lrno.

En dicho día. Fuió el mismo Sr. Juan com-
pareció siendo citados el Sr. Andres Lepinola
de una vecindad, y presente yo el Sr. previa pro-
testa de dicha vecindad, fue interrogado al tenor del
escrito escrito, y a la primera pregunta, dijo,
Que aunque le comprenden las generales de la ley con
el Sr. Cns. Joaquin Blengio como supleniente conca-
guinio en segundo grado, no por eso faltara a la Verdad.
A la cuarta que le comprende, dijo, vivaba yo en la
casa del referido Blengio, cuando se presentaron el Sr.
Este político Sr. Juan Carlos a prender a aquel, & or-
den Superior, y que no manifesté orden ninguna
por escrito; pero Blengio contestó que cumpliría
luego que concluyere la protesta que estaba otor-
gando, se demore algo, y en ese tiempo se presentó
el Sr. Fran. Canafal y le intimó la misma
orden verbal sin presentar ninguna orden escri-
ta, y como en ese tiempo concluía su protesta,
se fué a la orden de Canafal y se lo condu-
jo a la cárcel. Que los dichos en la Verdad so cargo
de un protesta fecha en que se ratifica, que es ma-
yor de edad legal y firma con el Sr. Juez. Doy fe

Lic Montalvo

Andrés Lepinola

Francisco Campos.
Sr.



En dicho día. Fuió el mismo Sr. Juan com-
pareció el Sr. Francisco Canillo de una vecindad, y
presente yo el Sr. previa protesta de dicha vecindad
fue interrogado al tenor del escrito anterior por
las preguntas que le comprenden.

A la primera pregunta dijo: No me comprenden
las generales de la Ley de que estoy impuesto.
A la cuarta que le comprende, dijo, No presenté
orden de ninguna clase los Srs. Juan Carlos
y Fran. Canafal cuando fueron a la casa del Sr.
C. Joaquin Blengio a prenderlos, cuando yo presente,
y tanto el primero como el segundo dijeron que
iban & orden del Gobernador. Que es cierto



tiene que declarar siendo lo dicho en
verdad es cargo de protesta fecha en
que se afirma y ratifica que es mayor
edad legal y firma con el C. Juan D. J. P.

Lic Montalvo J. Carrillo

Francisco Campor.
Cno.

En el propio dia ante el mismo Cno.
Juez comparecieron siendo citados el Ciudadano
Fernando D. de Estrada de esta Vecindad, y
presente yo el Cno. previa protesta de decir
verdad, fue interrogado al tenor del pre
cedente decreto, y
a la primera pregunta dijo. No me com
prienden las gerencias de la ley de que
se trata y respondio.
A la segunda que le comprenda, dijo. No
vi que los Sr. D. Juan Barbo y Sr. Fran
cisco Campor, presentaron a D. Joaquin Blangia
la noche del diez de corriente cuando fueron
a prenderlo en casa y en la cual me hallaba yo,
ninguna orden por escrito, y solo manifes
taron que iban de orden del Cno. Gobernador
que lo otro es la verdad es cargo de
Montalvo Puso en que se ratifica que es ma
yor de edad legal, y firma con el Cno.
Juan D. J. P.

Lic Montalvo

Fernando D. de Estrada

Francisco Campor.
Cno.

En el referido dia veinte y cuatro

de Julio de mil ochocientos sesenta
y nueve, y en cumplimiento del auto
de esta fecha fogan doce de los autos prin-
cipales de comparendo promovido por el Sr. don
Joaquín Blengio, a quien le a ellos citas dili-
gencias de franquea promovidas por el
mismo Sr. Blengio. Doy fe
Campos.

En dicho día impuse al actor Sr. don Joa-
quín Blengio del auto a que se acañe
la fe anterior, y dispuso quedar enterado
Doy fe

Blengio

Campos

Seguidamente hice lo mismo
con el Fiscal Sr. don José Gómez
y quedó enterado. Doy fe

Gómez

Campos

Campuche Julio 30 de 1869

Vistos: estando cumplido el término en
que las partes devieron presentar sus al-
gatos, citen a las para tener en cuenta

Lic. Montalvo

Francisco Campos
Emo.

En Campuche a treinta y uno del mismo hice saber el auto
ante el Sr. Lic. don José Gómez, y dispuso quedar enterado. Doy fe

Lic. Gómez

Campos

En



Campeche a dos de Agosto del propio año, y no
ayer por ser domingo, tiene saben el antecitado au-
to al D. D. Joaquin Blengio y dió quedan ente-
rado, y firma. Doy fe.

Blengio *Campeche*

Campeche Agosto 4 de 1869.

Visto el presente juicio de amparo
promovido por el C. Dr. Joaquin Blengio
con motivo de una orden de prision del C.
Gobernador del Estado. Visto el escrito del ac-
tor en que alega haberse violado en aquella
orden los artículos 16, y 104 de la Constitu-
cion federal y en que pidió preventivamen-
te la suspension del acto reclamado; el in-
forme justificado del Gobernador; las prue-
bas producidas por el actor durante el térmi-
no de prueba, y no haciendo mérito de los a-
legatos del quejoso ni del Ministerio fis-
cal por no haberlos producido hasta esta fecha.
Vista la citacion para sentencia; y Con-
siderando, primero: que en el presente caso no
es de resolverse ni de considerarse si el Dr.
Blengio es o no ciudadano, puesto que las ga-
rantias que la Constitucion federal otor-
ga, las otorga indistintamente a todos los
habitantes de la república, pues habla en
general de derechos del hombre y no del
ciudadano. Segundo: que, segun la misma
carta fundamental citada, el Gobernador
del Estado es incompetente, por regla gral,
para ordenar la aprehension de un indi-

viduo, pues la parte final del art. 21. de la
Constitucion, que cita en su informe, al
conceder a la autoridad politica o admis-
trativa la facultad de ^{imponer} ~~imponer~~ como cae-
cion hasta quinientos pesos de multa o un
mes de reclusion, ademas de referirse es-
clusivamente al Ejecutivo Federal, expresa
terminantemente que dicha facultad solo
puede ejercerse en los casos y modo que espe-
samente determine la ley, y en tal virtud,
no existiendo, como no existe, una ley re-
glamentaria del mencionado articulo se
debe suponer denegada esta facultad a los
Gobernadores, o a lo menos estar a lo que, sobre
el particular, dispongan las constituciones
particulares o leyes locales de los diferentes
Estados. Tercero: que en este supuesto es termi-
nante la fraccion 15. seccion 11. de la Consti-
tucion de este Estado, que previene que juri-
dicamente por faltas de respeto puede im-
poner el Gobernador a un individuo la pena
de quince dias de prision en defecto de cin-
cuenta pesos de multa. Cuarto: que segun se
deduce del referido informe del Gobernador,
no es el caso de faltas de respeto el que lo im-
pulsó a reducir a prision al Dr. Blengio. Quin-
to: que en tal concepto, y aun suponiendo
que fuera autoridad competente el citado go-
bernador para decretar la aprehension de
Blengio, debió haberlo hecho por medio de
mandamiento escrito que fundara y mo-
tivara la causa legal del procedimiento,
y no por una simple orden verbal, como
lo verificó. Sexto: que no habiendo cumpli-
do con tales requisitos, ha violado el articulo
diez y seis, seccion primera, titulo primero



de la Constitución federal. Séptimo: que no obsta para el caso decir que el Sr. Blengio recibió una orden de prisión por escrito del Sr. Jefe político de esta Capital, pues en primer lugar la razón de incompetencia para dictar tal orden existe con mayor razón respecto de esta autoridad que de la del Sr. Gobernador, y en segundo, ni aun en ese mandamiento escrito se fundaba ni motivaba la causa legal del procedimiento. Octavo: que el Gobierno en el caso ocurrente no puede usar de la acción popular de la parte final del citado artículo diez y seis de la Constitución General, pues no consta que el Sr. Blengio haya sido aprehendido infraganti delito, por que según se desprende de las constancias que obran en la causa que se le ha seguido en este juzgado por presunciones del delito de conspiración y que se hallan certificadas en estos autos, fue aprehendido a los treinta y dos días de haber tenido lugar el hecho por que se le aprehendió, lo que indica que no fue cogido en el acto; estando esto también confirmado por el oficio del Gobierno en que lo consignó a este juzgado como reo de conspiración, pues que no espresa en él haberlo aprehendido infraganti delito. Noveno: que el art. Diez y nueve que el Gobernador invoca para justificar su procedimiento es de todo punto inaplicable al caso, pues solo se refiere al tiempo que un individuo puede estar detenido sin auto motivado de prisión, y de ningún modo al acto material de la aprehensión que es de lo que se trata en el presente caso, en que si se admitie-

ra la interpretacion que a dicho articulo da la referida autoridad se tendria como contradictorio del diez y seis cita — dos con el cual es notoriamente con — cordante, lo que implicaria evidentemente un absurdo legal. Décimo: que el articulo 104 de que hace mencion el actor solo establece el fuero constitucional de que gozan los altos funcionarios federales y entre ellos los diputados al Soberano Congreso de la Union. Undécimo: que este privilegio no puede considerarse en manera alguna como una garantia individual y en consecuencia no se halla comprendido en ninguno de los casos de amparo que establecen los articulos 101 y 102. de la Constitucion federal y la ley organica de 20. de Enero ultimo. Duodécimo: que fuera de los casos comprendidos en la citada ley no procede el amparo en ninguno otro y por lo mismo el hecho de no haber respetado el Gobierno el fuero constitucional del Sr. Blengio podra titularse un atropellamiento, una violencia o cualquiera otra cosa, pero nunca un caso de amparo. Décimo-tercero: que el acto reclamado por el actor respecto de la violacion del art.º diez y seis de la relacionada Constitucion, esta expresamente comprendido en la fraccion primera, art.º primero, capitulo primero, de la ley organica, de 20 de Enero del presente año. Décimo-cuarto: que, de conformidad con la parte final del art.º tercero del mismo capitulo y ley que es confor-



12
dante de la parte final del artículo quin-
to, era de decretarse a la mayor breve-
dad posible y con solo el escrito del ac-
tor la suspensión del acto reclama-
do, como lo verifico este Jurgado, en a-
tención a la urgencia notoria del caso,
puesto que tanto por la naturaleza del he-
cho que no permitia despues de consuma-
do indemnizacion de ningun genero, cuan-
to por las circunstancias de la hora en
que se cometia y de la alarma que su e-
jecucion habia producido en la pobla-
cion toda, como es de publica notoriedad,
era de repararse incontinenti, pues en
primer lugar el caso ocurrente era de aque-
llos que una vez consumados no admi-
ten resarcimiento de danos y perjuicios,
y aun cuando pudiera admitirlo debe té-
nerse en el presente la famosa regla de
derecho que dice: "Melior est intacta fi-
re servare quam vulneratam causam reme-
dium querere" En efecto, si la suspensión
de la orden de prision no se hubiera re-
suelto de plano, la garantia constitucio-
nal hubiera sido verdaderamente ilusoria,
puesto que al concederse en definitiva el
amparo solicitado no se hubiera consigui-
do otra cosa que satisfacer la fórmula del
juicio, pero de ningun modo llenar cum-
plidamente el precepto constitucional, vi-
niendo a ser este irrisorio y la garantia, ob-
jeto de él, burlada. Considerando finalmente
que estando el acto reclamado como ya se ha di-
cho comprendido en la fraccion primera, ar-
tículo primero de la ley organica citada se
ha cumplido al decretarse su pronta suspen-

sion condicional tenor del artículo 6.º de la misma ley. Con cuanto mas — — — — — considerar y tener presente convinio, y — — — — — fundamento de las disposiciones — — — — — constitucionales y leyes citadas, se declara: Primero. La Justicia de la Union ampara y protege al C. Dr. Joaquin Blengio contra la violacion del artículo diez y seis de la Constitucion General de la Republica cometida en su persona por el C. Gobernador del Estado la noche del dia siete del proximo pasado. Segundo. La Justicia referida de la Union no lo ampara ni lo protege contra la violacion de su fuero constitucional, como Diputado Suplente al Soberano Congreso de la Union, por no ser esta violacion un caso comprendido en ninguno de los que especifica el art.º primero de la ley de amparo vigente, y los artículos ciento uno y ciento dos de la Constitucion federal. Tercero. En atencion a que el C. Blengio se encuentra actualmente en libertad por haberlo consignado el Gobierno a este. Juzgado antes de concluirse este juicio, como reo de conspiracion en cuya causa se sobreescribió poniéndole en libertad al C. Blengio bajo caucion protestatoria, interin se revisan los procedimientos de este juzgado por la Superioridad, ténganse como restituidas las cosas al mismo estado en que estaban antes de la violacion de garantías cometida por el Gobernador. De conformidad con los artículos catorce, capitulo tercero, y veinte y seis



20
te, capitulo quinto, de la ley citada de
veinte de Enero citada, librese copia
a la redaccion de este fallo a la redac-
cion del "Espiritu publico" periodico
semi-oficial de esta Capital, para su
publicacion, y remitanse originales estas
diligencias a la Suprema Corte de Jus-
ticia para su revision. Asi lo proveyo
y firmo el C. Lic Pedro Montalvo Juez de
Distrito de este Estado. Doy fe. = Entre
 renglones = imponer = vale = Festado = informar =
de = citada = a la redaccion = no vale.

Lic Pedro Montalvo

Francisco Campos
Lmo.



En comparecencia de uno del mismo tiene va-
ber al Cno. Dr. Joaquin Blengio el auto
de sentencia anterior, y dijo quedar en-
terado. Doy fe.

J Blengio

Campos

Indicho dia impuso del propio fallo
anterior al Cno. Lic. Jose Gomez Fical-
te erre Juezado, y dijo quedar impuesto.
Doy fe.

Lic Gomez

Campos

En comparecencia de uno del mismo, libre la copia pre-
venida en el fallo anterior. Doy fe.

Campos



Campeche Agosto 9 de 1869

Con esta fecha se riorra este expediente
para llevarlo ala Administracion de Correos
tan luego se aproxime la salida de al
gom buque con destino a Veracruz. Doy fe.

Campeche


República Mexicana
Jefe de Distrito del
Estado de Campeche

Recibido hoy 3 de Set. de 1869

21

México Set. 3/69

A su expediente.

Aguilón
Sno.

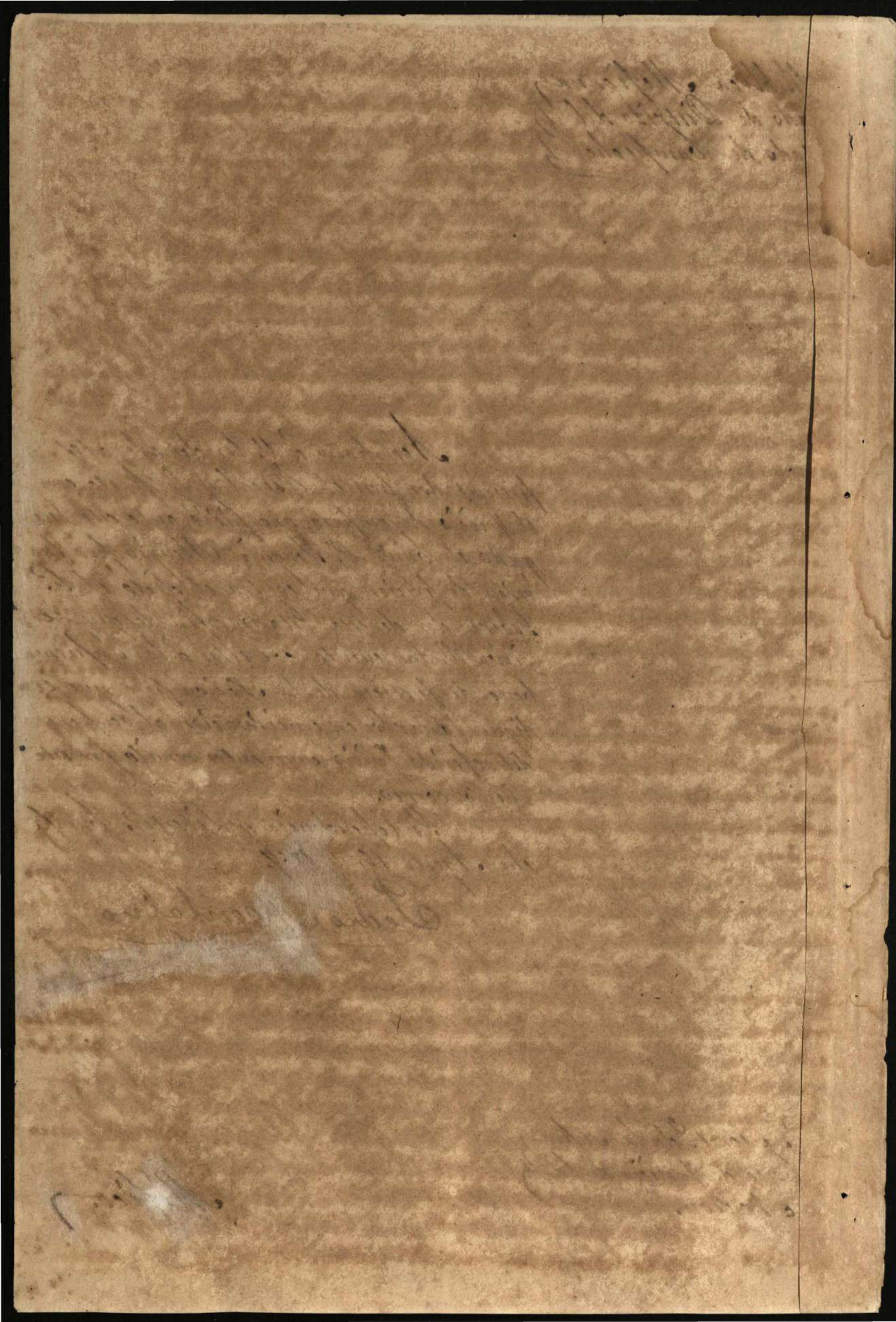
Acompaño a V. los dos alegatos
presentados por el Fiscal y la parte en
el juicio de amparo que siguió ante este Jefe
gabo el Ciu. D. Fraguin Blumio por la
orden de prision que contra el dicto el C.
Gobernador de este Estado, a fin de que se
sirva V. dar cuenta con ellos a la Suprema
Corte de Justicia de la Nacion para que se
digne tomarlos en consideracion al ocuparse
del referido juicio cuyos autos remito por este
mismo correo.

Independencia y Libertad. Campe
che Agosto 16. de 1869.

Pedro Montalvo

Ciu. Secret. de la Supre
ma Corte de Justicia de la
Nacion.

México.





22
Cm. Juz. de Distrito.

El infrascripto, alegando en el juicio de amparo promovido por el Sr. Dr. Joaquín Blengio por violación de garantías cometida en su persona por el Gobernador del Estado, dice: Es de decretarse en mi concepto el amparo solicitado y así pido que se haga por las razones y fundamentos que paso a exponer.

Haré conocidos en no solo del Juzgado sino aun del público los hechos que han dado origen a suscitante juicio, pues por parte del Gbo. ha habido algun empeño en llamar la atención de la prensa, consignando tales hechos en el periódico semi oficial de esta Ciudad el "Espiritu Público", y en donde se asevera con alguna ligereza que el asunto de que me ocupamos no podría ser nunca motivo de un juicio de amparo. Este Comandante me hace presente de formar un extracto sin comentarios y detallado de aquellos hechos para presentarlo a la Consideración del Jefe y hacer en seguida aplicación de las disposiciones establecidas por derecho. Sin embargo procuraré indicarlo muy ligeramente. Lo primero que ante todo se ofrece a la contemplación de este Comandante es el escrito del actor que obra como cabeza del juicio y en que se demanda además del amparo la suspensión de la providencia del Gobernador para reducir a aquel arbitrariamente a prisión, por haber emitido su opinión acerca de la legitimidad de otro Gobernador ante el H. Ayuntamiento de esta Capital. En ese escrito se se mani-

fuera la intencion del quejoso de ser
~~un~~ como atentatorio al art. 16 de la
Constitucion federal aquella
providencia, haciendo entender que
ella no consistia en un mandamiento
apreso que fundara y sustiara la can-
da legal del procedimiento; en apoyo
de lo cual dicen en la parte pro-
bativa las actuaciones del Jefe po-
litico del secret. de Guerra y Guardia
Nacional (ambos aprehensores del actor) y
de todos los demas individuos que de-
clararon a peticion del mismo quejoso.
Formando parte de los hechos se halla tam-
bien a muy pocos fs. del tomo de queja
el largo informe del Sr. Gobernador en
que con destreza aparece demostrarse
que la actividad politica i administra-
tiva ordenando la prision del Dr. Blenjo
de la manera que lo hizo, usaba de un
poderio indisputable. En Constitucio-
nal como que el finis est en Conser-
vador segun los datos en que la Consignó al
jefe de Ejerc. dando terminados de una acta
levantada en una sesion del Cons. con
un voto de anticipacion a la aprehension
y en la que el Dr. Blenjo dijo que Dn Pablo
Garcia no debia considerarse legalmente
Gobernador, obran en copia de la fga
y el todo.

Todo son los hechos compendiados brevemente
pero lo bastante para advertir que al pre-
sente existen en nuestra sociedad una ver-
dadera colision entre el interes individual
y el interes social y cuyo antagonismo es
necesario de todo punto combatir y ter-
minar por una de esas decisiones justas y
desapreciables, prevenidas por la ciencia
y la justicia.

El entrar en la cuestion de derecho



23
Para hacer de él un código aplicable
a todos, por ventura al Oficial
que antes de presentarse a los interesados
por memoria que ha precedido de exa-
minar en este orden legal, presente al
jefe de la república, república de los legi-
timos derechos, del interés privado
y del interés social.

Que que no es una oferta engañosa
de una máxima imperiosa de justicia,
la que halla en la ley el ser de

otra Carta fundamental, a saber: Que

los derechos del hombre son la base y

el objeto de las instituciones sociales, de

hecho por el hombre con respeto y

soberanía por toda ley y por toda autori-
dad. En efecto, en el estado de sociedad

seguir una institución la seguridad y la li-
bertad del individuo, en el momento

de pasar en práctica el ejercicio de tan

valiosos atributos, se debe a efectos

de respeto que a la una inapreciable do-
minación de la ley, más que de una

autoridad o una fuerza superior pero

inferior, primera y quebrantar el orden

y mantener de que deben gozar tranquilamente

los asociados y que son el senti-
do directo de aquélla institución práctica

El punto en que la ley social no

tiene ninguna independencia ni dispo-
nición de la ley social, pues como

dice Rousseau en su Contrato Social: "El poder

de los habitantes de una sociedad es una

cosa que no puede ser perfecta y

entrar en la categoría de perfectos que

se le atribuye a la naturaleza del hombre

accidental y superior, injusticia". Pa-
ra evitar que el error en este extremo

desagradable debería privarse con res-
peto a la ley en las garantías orga-
nizadas al fin, notando aquellas que son

insuperables por su naturaleza, aquellos
que según una regla de derecho de
ben ser agudados por todos por q.

que es la esencia de la misma naturaleza:
vale como la libertad y la seguridad
personal. Por supuesto, tal no sucede
sin que una o muchas veces nuestra
seguridad se ve comprometida por una
falta de conciencia, sujeta por la ven-
ganza, otras veces vemos embargada
nuestra libertad en un oscuro calabozo
por un momento de falta de tranquilidad
pública, haciendo retener a los presos de
nuestros delitos físicos, mientras se persiguen
los morales por los intereses. Contemplando
un poder remediar la infirmitad en
que se encuentran humanas tripulaciones.

Pero si es verdad que bajo todos aspec-
tos la libertad del hombre debe ser res-
petada y garantida por todos debe
haberla como el orden. Perreau "Ser
circunscribir para todo individuo racio-
nal dentro de los límites (conocidos) esta-
blecidos por el Convencimiento y el sen-
timiento del verdadero interés, pues
fuera de estos límites ella no es mas
que licencia y licencia. En esta vir-
tud debe seguir el mismo autor con-
tinuando siempre de una manera
conforme a lo que exige el bien general
de la sociedad, pues que este bien gene-
ral comprende nuestro bien particular.
Y por tanto que nada hay mas enarmo-
nizado con los inmutables principios de
equidad y justicia, por q. la libertad
política que hablando en esta terminación
no es otra cosa que la perfecta seguri-
dad o por lo menos la opinión de la
propia seguridad, exige para el in-
dividuo en particular que no se le
estorbe en el libre empleo que haga



de esos derechos, también la sociedad exige a su vez un beneficio que los particulares profusen con respeto profundo a las instituciones que determinan su marcha hacia un cabal perfeccionamiento y felicidad. Los mismos deberes son pues los que establecen una fundamental distinción entre el principio individual y el principio social demarcando a cada uno sus legítimos derechos. Este debe que al individuo le está permitido el ejercicio de todas sus facultades con otros sin perjudicar el derecho de tener. En tanto que el Gbo. representando el sistema social le está concedido el derecho de defenderse de los asociados produciendo una virtud, near de todos los derechos propios que la ley le concede para su propia. Cualquiera desobediencia o atentado que promueva al mal hecho o perjuicio de aquellos. Haciendo así, el Gbo. por dar tiranía e injusto asegura al todo de las venturas que naturalmente debe producir la asociación. Mas si al contrario se aparta de la vía de sus atribuciones para votar bajo cualquier pretexto las garantías del individuo, agrediendo desde luego a un arbitrio de desorden.

Plantados estos procedimientos en que he querido demostrar que existen por parte de los que gobiernan como de los gobernados deberes e intereses los que es necesario cumplir para no quebrantar la armonía que debe reinar entre.

de sociedad bien organizada, vamos a exa-
minar en el caso que nos ocupa hasta
donde se ha llegado a ese com-
plimiento y por parte de quien se ha dejado
de cumplir. No se necesita gran penetra-
ción para entender que la falta se halla de
parte del Gto. y por ende es fácil tam-
bien advertir que cuando entre pidiendo un
establecimiento se se atribuyera al Dr. Plen-
gio de la provincia q. acuseba y fue por
la sola disposición de los hechos consignados
en el expediente. Pero enojosa aquella pa-
sion.

Don. los mejores reconocimientos de la aue-
ra de la beneficencia y hasta redu-
cirlos a estos términos. El Goberna-
dor del Estado estaba en el momento
de haber de aprehender al Dr. Plen-
gio Plénio y por ende a la misma po-
derada de los hechos de Distrito
los consignados y en ese caso se verifi-
có la intervención en los requisitos le-
gales.

Adelante me da y como lo así de antes
que el Dr. Plénio había de esta causa
aprobada de el Gto. y el Dr. Plénio
después de una sesión celebrada en el seno
del H. Ayuntamiento y en una sesión preci-
pues de una sesión de dos me-
ses en una sesión le otorgó
el Cuerpo. La por lo que se ve que
como a cree el Gobernador la causa
del referido Dr. Plénio para exceder el ca-
rigo a que se había hecho acreedor por
el delito de en su por acre- en que ha



haia incurrido (segun el Gto.) al decir
en la sesion referida que el Goben-
rador del Estado no debia conser-
var la legalidad de las pro-
hibiciones para el efecto por la
Constitucion de el año de 1867, no p-
uede decirse, sino lo que es mas pro-
bable y seguro es, que por aprovechar
la oportunidad de la partida de un buque
para la escapada Ciudad de Orleans,
un momento despues de su ausencia se presen-
ta al Gto. y espontaneamente el Sr. Ben-
jio. a la misma Ciudad inmediata-
mente el Gobernador de este Estado
por conducto de la Defension politica
de la frontera y de la tropa
con el derecho legitimo de que usaba
el Gto. de antes de dar la respuesta o-
ficial como se ve en el Gto. de el Gobernador po-
licita de el Gto. "Dios maravilloso, dice,
no se puede negar el derecho de la Defension
a toda persona, y a todo hombre o
comenzar la practica de aprehender al delin-
cuente y a sus complices en el caso de
delito infraganti" por consecuencia la au-
toridad politica y administrativa priva
da de su efecto. En verdad,
nadie puede negar la autoridad Guber-
nativa el derecho de aprehender a un de-
linquente infraganti, y respecto a la
autoridad el mismo Gobernador, seria negar
lo que es de ley. Si embargo el Fiscal en
negando el derecho no puede, a cor-
rer como fondo haberse mandado
aprehender a un delincuente infraganti.

En el Dr. Blengio. No puede haber con-
spiración mientras no haya algunas de algunas
estas personas con objeto de oponerse á
la ejecución de las leyes ó al cumpli-
miento de las órdenes de las autoridades
reconocidas; es así que en el presente caso
el Dr. Blengio que acababa de desembar-
car fué notificado solo en la Calle y
sin estar acompañado con nadie por un agen-
te de policía, para que lo siguiera á la
Cárcel: luego evidentemente no podía
haber conspiración en aquel instante:
luego no habiéndola, malamente se ha ha-
bido al Dr. Blengio como pirador infra-
ganti; y siendo esto así, injustamente
se le aprehendía como tal; de donde
sulta que el Gobernador exoneró ó
maliciosamente ordenó la prisión del
reputado Blengio, pero de uno u otro
modo saltó á la vista parte del art.
10 de la Constitución que invoca en su
defensa para justificar su providencia.
Ahora por una falta de una de la de
haber ordenado la prisión por medio
de una disposición verbal; lo cual es de
acuerdo con lo establecido en el art.
10 de la Constitución. La Constitución
previene que nadie pueda ser molestado
en su persona sino en virtud de man-
dato escrito de autoridad competen-
te que funde y motive la causa legal
del procedimiento. Y á nada conduce
el que el Gobernador diga que á todo el
mundo está obligado á obedecer á los
Agentes de policía cuando dicen por



26
apropio, "según lo dispuesto a la
breve por el artículo 104 de la
Constitución. Después de lo que se ha
explicado en este punto a permitir que
un individuo en algunas prevalece de
su fuerza y por ejercer un acto de ven-
ganza agarrando a mano armada a un
procurador al cual le ordena a media no-
che de ir a la cárcel. Este embrollo es cri-
minal y vergajoso en su esencia. Se ha
de tener en cuenta que se podría
dejar este tipo de acciones. Evidente
mente no. Procede a la prisión
del Sr. P. y el desprecio que
hago de los legisladores. Hecho evitar
estos abusos.

Se da como concedida esta última
pista en necesidad de evitar compro-
misos alguna parte de la función mis-
ma de los aprehendidos. El quejoso es
terminante sobre el punto del Go-
bierno. Se ha visto que se ha
hecho a los señores fiscales. En vista
de esto se ha pedido de que se decrete
el amparo solicitado por el Sr. P.
que se ha violado.
En la persona las garantías conteni-
das en el art. 16 de la Constitución
federal. No digo otro tanto respecto
de la violación y sí dice de hecho res-
pecto del art. 104. Por lo tanto a mi
no se contiene en el caso alguno
cuya violación exige un fallo. Por

[illegible]



27
bien Considerado, Puzados
le obligaron a formar con
rapidez este pedimento que
hubiera deseado elucidar con
calma por ser el asunto tan
interesante. Compeche, Agosto
6 de 1859.

José Gómez

Otro si digo: que como probablemente ya no
se ha de poder tomar en cuenta este
alegado duplio que se dirige a
la Suprema Corte, en la oportunidad.
Itur ut supra -

Gómez



Ciudad de Tuz de Distrito.

Proclamado en la República el orden federativo desde el 4 de Octubre de 1824, se hizo sentir como una necesidad urgente garantizar la inviolabilidad de los derechos del hombre. Unidos los Estados con el pacto federal, reconocida en este la soberanía particular de ellos, necesario era procurar la armonía que debiera existir entre ellos y la Federación, y precaver los ruidos e invasores ataques de las garantías individuales reconocidas como base de toda institución social. Una dolorosa experiencia lo venia enseñando. Los Estados extralimitando el principio de su soberanía y erigiéndose en dictaduras independientes, invadían unas veces la esfera del Poder federal y otras haciendo caer a pedazos el dogma político de la soberanía popular, hollaban torpemente los derechos sacrosantos del hombre.

Tan odiosa, tan apremiante situación debía producir ora mas tarde, ora mas temprano, un fruto deplorable y lastimoso. El germen de la inquietud se propagaba: la rebelión llegaba a consumarse. Ineficaz la acción de la ley para reprimir tamaños abusos, los Estados tenían necesariamente que recurrir a la fuerza para sacudir la fuerza y despedazar la coyunda que los oprimía. No todos se resignaban friamente a dormir el sueño de la esclavitud: en unos se entronizaba el despotismo: en otros la guerra civil. No habia término entre la servidumbre y la anarquía. La República entera marchaba al retroceso y a su ruina.

Pasaronse así veinte y tres años de continua lucha: hoy dominaba la dictadura, mañana el centralismo: el orden federal para nosotros ha-

bia sido una esperanza. Llegó el año de 47, y en él brilló como iris raditante de paz el sublime pensamiento consignado en la acta de reformas en sus art.º 8.º y 25. En ellos se estableció que para afianzar los derechos del hombre una ley determinaría sus garantías, y que los Tribunales de la Federación ampararían á cualquier habitante de la República en el ejercicio de ellas contra toda violencia ó ataque ya de los poderes de la Federación ó de los Estados.

Desde entonces se concibió tan feliz idea: desde entonces pudo creerse que el orden federal llegaría á ser una verdad práctica y no una palabra vana é irrealizable como desgraciadamente lo había sido. Mas no pudo llevarse á cabo creación tan dichosa y la anarquía seguía devorándolo la República; volvió á entronizarse la dictadura!

Nueve años mas de lucha fratricida! Pero ¡ah! bien pronto sonó la hora de Dios. La gran revolución de Ayutla fué consumada: el pueblo mejicano debía constituirse en una República representativa democrática federal en cuya forma hacia tantos años que anhelaba constituirse. Ella había sido la bandera de la lucha y justo era que fuese el símbolo de su felicidad y de sus esperanzas. El Congreso Constituyente interpretó fielmente la voluntad mejicana, buscó el modo de hacer realizable el sabio precepto de la acta de reformas de 47, y he allí que espoliando el Código fundamental de 57, adoptó en ella una de las sabias instituciones de la Unión Americana: los juicios de amparo. La República se vio ya constituida: el orden federal asegurado: solo restaba que



29
espidiéndose la correspondiente ley or-
gánica se hiciese realizable el pensa-
miento de nuestros legisladores de 57.
Así se hizo aunque algo tarde, y que-
daron establecidos entre nosotros real y
verdaderamente los juicios de amparo:
esta dictura institución en que se retrata
el loco desconcierto de los malos gobernantes
y en que halla un sacramento asilo la in-
violabilidad que se debe al derecho individual.
Si, los juicios de amparo son el pedestal
mas formidable que pudiera encontrar el
orden federativo y la libertad y demás de-
rechos del hombre. Ellos son el santuario
del desvalido: ellos han enseñado al pueblo
mexicano que el poder nada vale fuera
de la ley, que la justicia es lo primero,
que el derecho individual culmina sobre
todo. En ellos se halla el consuelo de la
opresión y el triunfo de la ley. Contra la
violencia: en ellos se descubre la tiranía,
punge la iniquidad, persevera la razón
y reina la justicia. ¡Oh! Bendiga el
Cielo a quienes supieron buscar con la
ciencia el antemural del usurpado, el
sosten del desvalido. Bendígalos si, porque
restablecido ya el orden constitucional en-
tre nosotros, el pueblo recoge hoy el opimo
fruto de ellos.

Me veis ya a mí, hoy vengo a este angus-
to recinto en que se adora la justicia, a ha-
cer vibrar la voz de la razón contra la tira-
nia, a reclamar con acento enérgico el respe-
to que se debe al derecho individual y a nues-
tra santa Constitución. Tengo fe íntima
en la rectitud del Tribunal que me es-
cucha y esperando satisfactoria, recta
y merceda justicia, entro a ocuparme
del objeto de este juicio.

Don don, C. Perez, las cuestiones que
se suscitan en toda controversia judicial:
la de los hechos es la primera,
la del derecho la segunda. Esta ya
bien justificado en estos autos el procedimien-
to arbitrario e injusto que dió origen al pre-
sente juicio: probado está hasta la eviden-
cia que la tarde del siete del mes pasado
acabado de saltar á tierra de mi regreso de
N. Orleans á esta Capital, el Gobernador del
Estado prevalido de su autoridad, sin mas
razon que la injusticia, ni mas causa que
la arbitrariedad, ordenó verbalmente al
Jefe político de este partido que se me
condujese preso á la cárcel pública de
esta Ciudad. Tan violenta y atentariamen-
te se pretendió llevar á cabo esta vejacion
que en el corto tiempo en que formula-
ba una protesta contra ella fué requeri-
do enatro veces, dos por los agentes de po-
licia que habian invadido mi morada,
una por D.ⁿ Juan Carbo Jefe político
y la ultima por el Chio de guerra y G.ⁿ
que fué quien me condujo á la prision.
Todo esto ^{está} repetido, insuficientemente compro-
bado en autos con la copia certificada que
obra de fs. 7 á tosta y con las declaraciones
de los C.^{es} Fernando Q. de Estrada, An-
dres Espinola, Fran.^{co} Carrillo, Fedoro Vai-
gas, Fran.^{co} Carraval y la de D. Juan Car-
bo y uno por lo tanto que nada hay q.^d
arguir ni que objetar en lo que concierne
á la cuestion de hecho. Voy á ocuparme del
derecho.

A la verdad solo por el respeto que
merece el digno Juzg.^o de N. voy á ocu-
parme del informe del G.^{no}, de ese
enjambre de sofismas y frivolidades fa-
laces con q.^d se ha pretendido engañar



30
la opinion pública y con el que se ha
ofendido también públicamente el
miramiento y deferencia que debiera
tributar a la justicia federal, y ante la
cual ha debido proferir esos torpes senti-
mientos y ruines personalidades que su len-
guaje deja conocer.

El principal fundamento que alega en
defensa de sus procedimientos es la parte final
del art. 16 de otra Carta fundamental que dice:

"Nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en
virtud de mandamiento escrito de la autori-
dad competente que funde y motive la cau-
sa legal del procedimiento. En el caso de de-
lito infraganti, toda persona puede aprehen-
der al delincuente y a sus cómplices, poniendo-
los sin demora a disposicion de la autori-
dad inmediata."

Chicorro es sin duda alguna invocar esta
prescripción. Cualquiera se atreveria a asegurar
con esto que el Gobernador ignora lo que se en-
tiende por el caso de delito infraganti; pero
no, no es esto así, si ello fuera ¿por qué no
dijo en el oficio en que me consignó a este En-
gado que me consignaba por haberme cogido
infraganti en el delito de Conspiracion? Allí
dijo que en virtud de los documentos que acom-
pañaba me creia res convicto de este delito.
¿Será esta (broma) según el lo mismo estar
convicto de un crimen que ser aprehendido in-
fraganti en él? ¿Ignora acaso el Gobu-
rnador que infraganti delito quiere decir sor-
prender a un criminal en el mismo he-
cho, es decir, en el mismo instante de su eje-
cucion? ¿Ignora acaso el Gobernador que a un
reo se le cree convicto de un delito cuando a pesar
de no haberlo confesado, está legalmente con-
victo de él, por las pruebas que un proceso

amigo en en Antrea y que no ha podido de-
necar. No puede ser mas pasapante y aban-
da la Confesion que ha pretendido
hacer para defender una ilegalidad
que jamas podrá justificar.
Yo adic podrá negar la significacion que
he dado a la palabra ~~supra~~ y siendo
esto asi, como se concilia con los tenaces
y reiterados esfuerzos que hizo por lograr
mi aprehension. El mismo hace la rela-
cion de los hechos, el mismo Confiesa en
un oficio de ~~transmision~~ que despues de la sesion
del H. Ayuntamiento, en que dice tuvo lu-
gar la conspiracion que desembarcada-
mente me imponia, me embarque para
el extranjero. Aparece del acta del H.
Ayuntamiento de ~~transmision~~ que ese mismo
dia se le remitió copia de ella y de la
anterior. Desde entonces me creyeron de
conspiracion y no me denunciaron al
Juez Competente. Por que? Porque des-
de entonces, una misma ~~fra~~ lo adu-
meio el malagado proyecto de saciar
un sentimiento mesquino de venganza
de ultrajarne, corrompiendome en me-
dio de la fuerza publica, y de mortifi-
carme con una incomunicada y peno-
sa prision. Allí está la confesion de un
abuso, vease el oficio citado, allí estan los
confesados los tenaces esfuerzos que hizo por
aprehenderme: solo omitio un hecho que
no debo dejar de consignar en esta defen-
sa. La tarde del dia ~~del pasado~~ sabedor de
que el pailebot nacional "Turk" que
me condujo a N. Orleans se hallaba de
regreso en este puerto, di orden a la
Jefatura de que se constituyese a en
bordo y qd desde allí se me condujera
preso a la Carcel publica de esta ciu-



dad) y á haber venido en otro buque³¹ se hubieran saciado sus torpes frenéticos y vejatorios deseos. Las confesiones que hace el mismo y este hecho que es probado en esta sociedad dejan ver hasta la evidencia un afanoso empeño en mi Captura. Después viene diciendo satisitamente porque no tiene abieno suficiente para decirlo paladinamente que me ha aprehendido infraganti. ¡Infraganti y he sido capturado treinta y cuatro días después del hecho que se me presume permisible!

IX

¡Infraganti y he sido aprehendido después de tan penosas y reiteradas tentativas! ¡Que extraño modo por cierto de aprehender infraganti desconocido por todas las legislaciones del Globo!

Voy á entrar en el examen de las diversas cuestiones q. en el orden legal pueden suscitarse en el presente caso. El art. 16. de la Constitución política general sanciona la garantía de que nadie puede ser molestado en su persona sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En vista, pues, de esta preceptación, son tres las cuestiones q. debemos examinar, y digo tres por que quiero dar por sentado, pero sin concederle ni un instante, que soy yo convicto del delito de Conspiración que con mandito descargo me impuso el Gobernador. Estas tres cuestiones son las siguientes. ¿El poder ejecutivo del Estado es competente para decretar la aprehensión de un individuo á quien cree convicto de un delito? ¿Disponiéndole esta facultad puede ordenar en Captura con una simple orden verbal? ¿Puede hacerlo con una simple orden escrita?

Es

evidente que al referirse el art. Constitucio-
nal á autoridad competente habla de la com-
petencia que dan las leyes, las ge-
nerales unas veces las particulares
otras. Es evidente por tanto que tratándose
del poder ejecutivo del Estado y siendo es-
te soberano para establecer su regimen
interior y los límites de cada uno de sus
tres Poderes, es inconcuso decir que la cues-
tion de competencia del Gobernador debemos
resolverla con vista de ntra. Constitucion
particular. Pensado este antecedente abra-
mos esta y veamos que facultades concede
al poder de que se trata. La seccion XI que
tiene por objeto demarcar sus atribuciones,
no le concede tal facultad. y es evidente
que no pudo ni podia haberse la concedi-
do. Su principal objeto ha sido evitar
las tropelias y arbitrariedades de que podia
ser objeto un Cmo. Y ¿no es cierto que conce-
diéndole tal atribucion su objeto seria ilusorio?
Para que un reo pueda decirse convicto de
un crimen es necesario que hallen en su
contra pruebas tales que no haya podido
desvanecer es necesario que se observen las
formalidades de un juicio Criminal y
¿cómo pues puede ser objeto del juicio
privado del Gobernador la calificación
de si un hombre está o no convicto de un
delito.

Por otra parte todo lo que es relativo
á la aplicacion de las penas, todo lo que es
relativo á la persecucion de los criminales es de
la competencia esclusiva del poder judicial.
Para esto lo ha exigido la sociedad y siguiendo
pues como debemos seguir estrictamente
la teoria del orden democrático federal el
poder ejecutivo invade la esfera del judi-
cial desde el momento en que extralimita la



siya con restriccion de la de este. El sistema
politico reinante profesa como el dogma mas
esencial a su estabilidad, la division com-
pleta, la absoluta independencia de todos
poderes publicos del Estado.

Pero hay mas todavia. A mas de verse omiti-
da en nra. carta particular la facultad de
que hablamos, el art. 84 establece: "Facultad
que no este conferida por esta Constitucion a los
Poderes del Estado, ni por las leyes a los demas fun-
cionarios publicos, se entiende que esta denegada."
¿Podrá pues con esto ponerse en duda la incom-
petencia del ejecutivo para ordenar la Captura de
un hombre aun cuando lo juzgue culpado de un delito?

La verdad necesario es confesarlo al emitir su
informe el Gobernador lo ha hecho atropando los gri-
tos ateradores de su conciencia, ella le dice "has vo-
llado la Constitucion, has abusado infunemente de
tu ministerio, te has hecho indigno de el y bien pres-
to la sociedad te exigirá estrecha cuenta." Mas si-
guámosle en todas sus partes. Pretendiendo fundar
q. en el caso presente no procede el amparo se es-
presa de este modo: "Pretender la autoridad
judicial impedir una aprehension que ha ordenado
la autoridad politica, es cometer la autoridad federal
un acto que vulnera y restringe la soberania del
Estado, es involucrar a la sociedad en el caso y realizar
el caso del recurso de amparo de la fraccion II del
art. 1.º de la ley de 20 de Enero, esto es, el amparo debe
tener lugar contra la autoridad federal judicial que
comete la invacion."

En verdad que si se repietha la historia de los
juicios de amparo, no se encontrará una autoridad
que como el Gobernador haciendo llegar el cinismo
hasta su colmo no obstante no da una razon le-
gal que justifique en firacdimiento, no obstante
que mira sus ordenes con instantaneo desprecio si-
no que en su loca obcecacion en su desenfreno
de poder, se avanza a decirle que sus actos de re-

stados vulneran, restringen su soberanía y con-
vierten á la sociedad en el caos. ¿Con qué
nombre clasificaremos este hecho legal-
mente? ¿No será esto un verdadero
desacato á la justicia federal? ¿No será este
un abuso de la autoridad que en malhadada
hora el pueblo depositara en sus manos? Con-
fío en la rectitud y energía de los Tribunales
y espero de ellos el amparo de mis derechos su-
merados y el severo castigo que clama á grito
herido el buen nombre de la justicia fe-
deral.

Mas adelante confirma el Gobernador:
"No quiere detenerse en la circunstancia de ha-
ber decretado el Juzgado la suspensión del actor
de aprehensión ordenada por el Gto., sin su
previo informe, como dispone el art. 5.º de la
ley, creyendo el Juzgado aplicable la parte
segunda del mismo artículo que habla de ur-
gencia notoria; porque si es evidente, como está
demostrado, que el recurso intentado no es proce-
dente y debió desecharse de plano, parece enton-
tante ajena del buen sentido la aplicación de la
parte segunda de dicho art. 5.º de la ley."

Raro es por cierto este modo de dar una cues-
tion. Para combatirlo voy á ocurrir á la inicia-
tiva que presentó el Ministerio de Justicia p.^a
reformular la ley orgánica de 30 de Set. de 61.
En ella se veña estableciendo estas disposiciones:
"Art. 5.º Si hubiere urgencia notoria, el Juez resol-
verá sobre dicha suspensión á la mayor brevedad
posible y con sob. el escrito del quejoso."

Art. 6.º Decretará la suspensión de la providen-
cia en materia Criminal solamente cuando en
ella se interese la vida del hombre, y en materia
Civil, solamente cuando se cause algún mal
que no sea susceptible de remediarse con inden-
nización pecuniaria."

Tales disposiciones comprenden el proyecto



del Ministerio sometido a la deliberación de la Cámara, y sin embargo la ley que se expidió y sancionó convenientemente contiene disposiciones diversas. Respecto del art. 5.º no se hizo modificación alguna, mas por lo que toca el art. 6.º fué modificado de este modo: "Podrá dictar la suspensión del acto reclamado, siempre que esté comprendido en alguno de los casos de que habla el art. 1.º de esta ley."

Esto explica suficientemente el ánimo de otros legisladores. Además no puede ser mas terminante esta disposición: ella se refiere al art. 1.º y este habla de leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales. Luego es incoherente que violándose la garantía individual que sanciona el art. 16 y pretendiéndose llevar a cabo esta violación de la manera mas violenta y atentatoria como se llevó es evidente que procedía de derecho la suspensión del acto, como hoy procede tambien el fallo de amparo, o lo que es lo mismo la declaración de haberse violado en mi persona aquella garantía. Las razones que tuvo el Poder Legislativo para reformar la iniciativa del Gobierno, fueron sin duda alguna las mismas que con elocuente y fluida argumentación defendió el notable jurisconsulto Sr. Manuel Sánchez. Oigamos sino como se expresa hablando de la reforma del art. 6.º de la iniciativa: "No existen ciertamente los mismos motivos, cuando se trata de la violación de garantías individuales: entonces el conflicto es entre el interés privado y el interés público, entre el poder y el derecho individual. En la colisión de estos dos intereses, la ley debe ser muy precavida; ni suponer que en todo caso la justicia está de parte del derecho individual, porque esta base seria un germen de intemperancia y de anarquía, ni suponer tampoco que siempre la autoridad ha obrado legalmente, porque esto

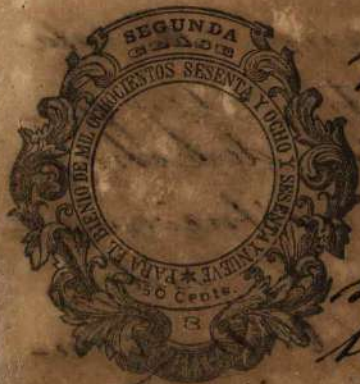
conduciría al despotismo, ocasionando muchas veces perjuicios de la mas grave trascendencia. La ley debe fijar con toda claridad y precision una regla invariable, para que en los casos en que por ser de grave consecuencia el daño que pueda causarse, sea conveniente y justo que la revolucion sea del momento, se puedan impedir males innecesarios e irreparables, despues de una tardia determinacion. = La iniciativa quiere que los Jueces de Distrito sean solamente Jueces de instruccion; y si esto puede ser inconveniente tratándose de garantias individuales, lo es mucho mas, si como se propone en el proyecto, la providencia reclamada no puede suspenderse en materia criminal, sino cuando se trata de pena Capital, y en el orden civil, solo cuando se verice un interes que no sea remediable con indemnizacion pecuniaria. Quitar a los Jueces de Distrito la facultad de sentenciar estos negocios, en su respectiva demarcacion, haciendo que sean recueltos por la Suprema Corte cuando se trata de hechos que exigen una reparacion inmediata, ó por lo menos de evitar que se cometa una injusticia, es ya por si solo muy grave; pero la inconveniencia sube de punto, cuando a aquellos funcionarios se les limitan sus facultades hasta el grado, de que no puedan suspender el mal, cuando va á consumarse a su vista. = Esta restriccion para suspender la providencia que motive una queja fundada, importa tanto, como que la ley imponga en toda caso que la presuncion de justicia sea siempre de parte de la autoridad. Esto no puede ser cierto ni es conforme a la razon. =

Despues figurando el caso de que en un Estado lejano de la Republica un Cívico fuere atropellado por una autoridad politica y ocurriese pidiendo amparo contra ella porq. gubernativamente le hubiese impuesto prision, ó presidio, ó mandado aplicar un banco de palos, ó dar tormento, ó demoler un edificio, despues de un



chas consideraciones filosóficas, se expresa
 así: "Cualquiera de estos casos es muy posi-
 ble, y algunos por desgracia se ven diariamente
 repetir. ¿Qué sucede entonces? Como no se trata
 de pena capital según la iniciativa, mientras
 la Suprema Corte no encuentra el amparo, el
 quejoso habrá sufrido los duros padecimientos
 del presidio, o las privaciones de la cárcel, o se
 le habrán aplicado los palos o el tormento, o ha-
 brá sufrido la pena de ser destruida por una
 orden de la autoridad, la finca que constituía
 su fortuna: ¿No valia mas en estos casos, que
 la ley previera para evitar el mal, impedir
 que se consumaran tales perjuicios? ¿No seria
 mejor prevenir que ordenar que se indemnice?
 Verdad es que en la mente del Sr. Dublan
 entraba la consideracion de que según la inicia-
 tiva los Jueces de Distrito eran de mera in-
 terlocucion y no podian dictar su fallo en el
 juicio de amparo; Mas yo pregunto ¿No
 son legalmente aplicables todas estas razones
 y consideraciones legales y filosóficas, aun
 en el caso en que como lo establece la ley vi-
 gente puedan dictar en resolucion? ¿Pues
 que si el Juez de Distrito no puede suspender
 la ejecucion de un acto cualquiera que sea q.
 viola una garantia individual, que fruto,
 que proteccion, que amparo podria encon-
 trarse despues del juicio? La sustanciacion
 de este exige un término de mas de quince
 dias y mientras tanto la garantia queda-
 ra violada sin remedio. ¿Como hay dice
 Dublan que nunca podran estimarse en dinero
 y entonces ¿qué fruto se sacaria del juicio?
 Además como el mismo dice, alguna vez la
 autoridad puede ser insolvente para el resarci-
 miento de los daños que padieran estimarse, y
 entonces ¿la justicia habria de quedar burlada?

Ni se diga que aqui se trataba de prision y no
de un acto violento que pudiese traer un perjuicio
irreparable, porq. segun la ley basta que el acto
viola una garantia individual para que contra
ella proceda la suspension y el amparo. Se
otra modo, si no pudiese decretarse la suspen-
sion de un acto de cualquier clase que sea q.
viola una garantia individual, si mientras
se resuelve el juicio el atentado habria de per-
petrarse, entonces el fallo de estos Jueces mas
que para amparar y proteger serviria para que
el quejoso entablara sin juicio de responsabili-
dad contra la autoridad infractora; mas no, no
es esto ni puede ser asi; la ley ha querido proce-
der y no remediar, y si el prevido de V. degra-
da el pasado de Patria dirigido a una au-
toridad respectiva de la ley y del ministerio
publico de N. E. Perez, el objeto de la ley estu-
viera hoy cumplido. Pero no, todo se ha vio-
lado, omis derechos han sido conculcados, mi li-
bertad atropellada, la Constitucion escarneci-
da y hasta la justicia Federal ultrajada.
¡Ah!... y cuanto conduce la ceguera y la
parion de un mal gobernante!; Plegue
al Cielo que la tremenda Castilla de la
ley caiga inflexible sobre el delincente!
Mas sigamos nuestro examen. He de-
mostrado ya que cualquiera que sea la ga-
rantia individual violada, el amparo es
procedente y que la susension del acto
debe decretarse siempre que haya la
urgencia de la ley, si lo que es lo mis-
mo, violencia en ejecutarlo. He demos-
trado tambien que el Ejecutivo del Estado
no es, ni ha sido nunca competente para
ordenar la captura de un individuo -
aunque lo fuese convicto de un delito; y
aunque esto pudiese bastar para poner



punto á este alegato puesto que ca-
reciendo de esa competencia la ga-
rantia individual del art. 16 ha si-
do vulnerada, sin embargo quiero exa-
minar esta cuestion bajo todos sus pun-
tos de vista.

Y si pues analicemos la segunda cuestion.
En ella se pregunta si en caso de ser compe-
tente pudo haber ordenado mi captura con
una simple orden verbal como queda pro-
bado en estos autos que se verificó. Es-
ta cuestion, si así quiere llamarsele propi-
amente este nombre merece, no ofrece duda al-
guna. El simple y racional sentido comun
bastante en efecto para comprender que sin-
do ntra. Constitucion la Suprema ley de
la Republica y estableciendo en su art. 16
que para q. ^{pena de persona} sea un individuo pueda ser mo-
lestado, se necesita un mandamiento es-
crito fundado y motivado, (ninguna au-
toridad) por caracterizada que sea puede
ordenar la prision de un individuo
sin estos requisitos. Repito que este
punto no merece examen de ninguna
clase, y por lo tanto siguiendo el camino
que me he prometido paso á entrar en
la tercera solucion. Disponiendo que el
Gobernador era autoridad legitima para or-
denar mi captura por q. me juzgaba con-
victo de un delito i pudo haberlo hecho
con una simple orden escrita? Tan sen-
cilla es esta cuestion como la anterior. A la
vista de la flagrante disposicion del art.
Constitucional citado, no puede venir
vacilacion de ningun genero. El requiere
ademas del mandamiento escrito q. se funde
y motive la causa legal del procedimien-
to; y en verdad que no se necesita estudio

ninguno para averiguar la causa de esta
disposicion. En efecto ¿si nuestra ley fun-
damental ha reconocido que los derechos
del hombre son la base de las instituciones
sociales, si en principal objeto ha sido
garantir estos derechos y dar al C. un escu-
do que le defendiera de la arbitrariedad y
del abuso como podia exigir solamente el
requisito de su la orden escrita? Con-
sin embargo, si la injusticia se consen-
tiera, el C. seria violentado, sus derechos
ultrajados y todo esto bajo la sombra y en
el pedestal de la legalidad ¿y podrian ha-
ber consentido esto otros legisladores Consti-
tuyentes? De ningun modo. Ellos fuertes
con el proposito de hacer una verdad prác-
tica los derechos del hombre, de poner un
digne poderos a todo acto abusivo, que no
podria dar otro fruto q. la degeneracion del
sistema politico y un patulo constante de
rebelion, sancionaron hasta donde se lo
permitieron los limites del orden y de
la estabilidad social, la garantia preciosa
de la seguridad personal. Por eso exige
a mas del mandamiento escrito, que se
funde y motive en el la causa legal
del procedimiento.

No quiero cerrar mas la atencion del In-
gado con cuestiones que se resuelven por el mas
simple y racional sentido comun. En toda
la Republica se ha acatado literalmente la
prescripcion del art. 16 y la prueba mas total
e inmensa de esto, se ve en los diversos juicios
q. se han seguido por en violacion y en los que
los quejidos han alcanzado ^{la} mas eficaz justi-
cia. Véanse sino los fallos de emision de
amparo publicados en el "Derecho" q. se encon-
tran a fs. 152, 164 y 165 del primer tomo



y fo. 167 del 2.º.

Con tan claras disposiciones legales y con estas ejecutorias, confío en que el fallo de este Tribunal me será propicio, como lo demandan el bienestar de la sociedad y la estricta observancia de la constitución.

Esto debo concluir, C. Dñez, sin llamar la atención de V. sobre la orden presentada por el Comandante de policías C. Federico Vargas, y que aparece compulsada en su declaración. En primer lugar dicha orden no está suscrita por el Gobernador, que era la autoridad que ordenaba mi prisión, sino por el Jefe político que para el efecto era tan incompetente como aquel; en segundo lugar ella no se dirige á mí sino que fué dada á dicho Comandante tan solo para que este justificara sus procedimientos. En único valor consistía en que á quien iba dirigida, podía servirle de resguardo, y siendo en caso de un conflicto, por lo que nunca podía serme ~~entregada~~ entregada: en tercer lugar consiguiente con este objeto, no expresaba mi nombre ni podía expresar la causa y el motivo legal del procedimiento.

Creo haber llenado satisfactoriamente el objeto del presente alegato: creo haber demostrado suficientemente que la tarde del siete del pasado fué violada en mi persona una de las mas santas ^{y mas} precias garantías, la libertad individual. Solo me resta ahora hablar aunque ligeramente en obsequio de la brevedad de la violación del art.º 104 de nra. Carta federal. El hablando del fuero de los Diputados al Soberano Congreso de la Unión en los casos de delitos comunes, es

tablece que este exigido en gran jurado
declarará á mayoria absoluta de votos si-
há ó no lugar á proceder con-
tra el acusado. Luego es evidente — q.
mientras no se haga esta declaracion no
se podrá proceder contra ellos y por tan-
to no pueden ser reducidos á prision por
que esta es uno de tantos y de los mas gra-
ves procedimientos de una causa criminal.
Yo soy diputado suplente para justi-
ficar esto. Creo que me basta la confesion
que hace el Gbo. en su informe y el do-
cumento publico oficial que se he inserto
en el n.º 33 del "Espiritu publico"; por-
tanto siendo acreedor á ese fuero Consti-
tucional, detiendo haberse acatado como
merecia, el art.º 104 ha sido violado, des-
preciado y escarnecido. Y si se diga
que por ser solo suplente no me compe-
te este fuero, no, allí estan repetidos
casos de concecion que se han dado en la
Republica y ante estas ejecutorias cual-
quiera interpretacion contraria carece
de fuerza y de valor. Ademas la de-
claracion á que alude el Gbo. de estar
privado de los derechos de Com. del H.
Consejo de Estado á mas de ser en si
nula por haberse dictado en virtud de un
documento que el Hama acta de adhesion
al Imperio de la Ciudad de Tr. Juan de Bta.
de Tabasco; pero q. no tiene autorizacion de
ningun empleado oficial ó ministro de G.
publica por lo que no merece G. y en aten-
cion tambien á haberse dictado sin oirme
antes, sin embargo de haber desmentido pú-
blicamente la firma mia que aparece al
fue de él, á mas de esto digo tal declaracion
no puedo ofrecer argumento ni duda alguna



34
respecto de mi carácter de Diputado,
por q. mientras no se revise mi creden-
cial por el S. Congreso de la N. que
es el único juez competente para califi-
car la legalidad o ilegalidad de mi elec-
ción soy acreedor á todos los fueros y pre-
rogativas q. como tal otorga otra Consti-
tución.

El objeto de los juicios de amparo ha-
sido y es defender la incolumidad de la con-
stitución y es inconcuso que en los hechos per-
petrados ^{en} ~~por~~ mi persona ella ha sido im-
punemente pisoteada violando mis derechos
como Cmo. violando mi fuero Constitucional
como Diputado. Si C. Díaz he sido vic-
timas de sentimientos torpes y mezquinos
desdichados con el poder he sido sacrificado
en aras de la venganza y de la arbitrarie-
dad. Todo fue consumado impunemente
á nombre de una autoridad absoluta y
apoyado con una fuerza despótica y opre-
sora! Todo fue consumado sin mas ra-
zon que el abuso ni mas pedesal que
la injusticia. Mas ya que la injusticia
y el abuso los ha entronizado la fuerza
y la violencia, necesario y justo es q.
se desplomen ante el angustio y sacro-
santo poder de la justicia. Necesario y
justo es, que V. C. Díaz, órgano de la
ley y encargado de su cumplimiento —
me conceda franca, satisfactoria y cum-
plida justicia. Pongo plena seguri-
dad y firma en mi causa. Mi cora-
zon está inmutable, mi conciencia
está tranquila, mi fe es íntima, mi
confianza es profunda. Todo me dice
que nuestro fallo debe ser recto y justicie-
ro. Todo me dice que él debe ser enérgico

144
como lo es la justicia. El debe declarar como
lo pido a nombre de la ley y de la
Constitucion ultrajada, que el
Gobernador del Estado atenuando de su
ministerio, violó abierta y obstina-
damente mi fuero Constitucional y tro-
lló por fementido uno de mis mas santos
derechos, mi seguridad personal. Tal
debe ser vuestro fallo, y asi lo espero.
El hará comprender al pueblo Campe-
chano, que en la justicia se encuentra la
justicia, que la razon vence al poder, q.
el derecho individual es lo primero y q.
felizmente han pasado ya los infor-
tunados tiempos en que debia resignarse
pacientemente a sufrir el duro y continuo
peso de la arbitrariedad. Casapueblo,
Aguasto de 1869.

J. Benigno



México, Setiembre
seis de mil ochocientos sesenta
y nueve. Visto el juicio de
amparo promovido por el Dr.
Sanguin Bloncin ante el
Jefe de Distrito de Cam-
peche contra la orden de pri-
ción del gijoso dada por
el C. Gobernador del Estado
ordenando la prisión la me-
che del suite de Julio Mé-
niz con cargo de haber blan-
queado violadas en su persona
las garantías que otorgan los
artículos diez y seis y veinte
cuatro de la constitución ge-
neral. Considerando respecto
de los que reconoce el prime-
ro de dichos artículos: que se
que aparezca del expediente,
la orden de prisión de Blan-
que no fundó ni motivó la
causa legal del procedimi-
ento, la falta de cuyos re-
quisitos importa la viola-
ción de una garantía. Y
Considerando respecto del

artículo ciento cuarenta que
cualquiera Blengio este elec-
to diputado al Congreso
general si bien se establece
en la Constitución el fuero
del gran jurado para los
altos funcionarios a que se
refiere, el recurso de amparo
según los artículos ciento ve-
inte y ciento dos se da a los
habitantes de la República
en la calidad de individuos
y no en la de funcionarios
públicos. Por los fundamen-
tos expuestos se decreta: Pri-
mero: Que se confirma la
sentencia pronunciada el
veinticuatro del mes p.p.^o
por el Juez de Distrito
de Campeche que declara
que la Justicia de la U-
nion ampara y protege al
C. Dr. Joaquín Blengio en-
tra la violación del artícu-
lo diez y seis de la constitu-
ción general de la Repú-
blica, cometida en su per-
sona por el C. Gobernador
del Estado la noche
del día siete de Julio.





Segundo que se confirma
la propia sentencia en la
parte que declara que la
Justicia de la Union no
ampara ni protege al
Dr. Blengio contra la vio-
lacion de su puro Consti-
tucional como diputado
suplente al Congreso de la
Union, por no ser esta
violacion un caso compren-
dido en ninguno de los que
especifica el articulo prime-
ro de la ley de amparo vi-
gente y articulos ciento uno
y ciento dos de la Constitu-
cion federal. Ferrero = Devu-
lvanse sus actuaciones al
Jefe de Distrito con copia
certificada de esta senten-
cia para los efectos consi-
guientes. Publíquese por
los periodicos y archívense
en su vez el Fojas. Asi lo
determinaron por mayoria de
votos respecto del primer
punto, y por unanimi-
dad respecto de los demas
los C. C. Presidente y Mi-
nistros que formaron el

Tribunal Pleno de la Corte
de Suprema de Justicia
de los Estados Unidos

Mexicanos y firmaron
Presidente - Pedro Vazquez
Ministros - Vicente Riva
Palacio - J. M. Lafragua
P. Ordaz - Ignacio Ramirez
Joaquin Cardero - M. Auro -
L. Guzman - Luis Velazquez
M. Tabala - José Garcia
Ramirez - L. Guzman - Lic
Juan A. Mateos, Secretario

Es copia que certifico. México Setiembre
seis de mil ochocientos sesenta y nueve

José A. Maza

Procurador

de la Corte

Por acuerdo del Tribunal
Pleno, reunido a 14 en fecho
y 15, el junio de compare, promovido
por el C. Dr. Joaquín Blengio
y en fecho, la copia certificada de la
Sentencia que en dicho punto proveyó
esta Corte Suprema, suplicando
que aiese el correspondiente recibo.

Yardes y Lib. México. Fe-
brero 9. de 1869

J. M. de
Parragón,
apl. Mayor

C. Juez de Distrito del Estado

de

Campesote



THE
LIBRARY
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
AGRICULTURE
WASHINGTON
D. C.

Cam



Fecha Octubre 28 de 1869.

41.

Acumulenle a los autos de amparo promovidos por el Sr. C. F. Blengio, los alegatos del Fiscal y del quejoso, como tambien la copia certificada de la sentencia que en dicho juicio pronunció la Corte Suprema y el oficio de remision anterior, de lo que se informará a las partes, acunándose recibos; y librase copia certificada de dicha sentencia suprema para que se publique por el periódico semi oficial titulado El Espiritu Publico.

Lic Montalvo

Francisco Campos.

En Campeche dicho día mes y año prevení que la acumulacion prevenida en el auto anterior, Doñe.

Campos.

Doñe que no haga la notificacion prevenida en el auto anterior al C. Dr. Ezequiel Blengio, por que es de necesidad en America de esta Ciudad para la Capital de la Republica, Campeche Octubre veinte y nueve de mil ochocientos sesenta y nueve.

Campos.

En dicho día fui saber al C. Fiscal Lic. José L. Torres el auto anterior y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que incluyó la certificación precedente a que se refiere, y dijo quedar enterado. Doñe.

Lic Torres

Campos.

Camp. Octubre 20 del 869

Con esta fecha y en una hoja sellada guarnida, he-
bre' copia autenticada de la copia certificada
de la Provision de la Suprema Corte de Justi-
cia, para el efecto prevenido en el auto an-
terior. Doy fe.

Camp.



En el mismo dia se puso oficio al Oficial Mayor
de la Secretaria de la Suprema Corte de Justicia
de la Union, acordandole recibo de estos autos como
se previene en la providencia anterior, para
remitirlos en primera oportunidad. Doy fe.

Camp.

